

54ª REUNION — 10ª SESION EXTRAORDINARIA — MARZO 23 DE 1988

Presidencia del señor diputado Eduardo Alberto Duhalde

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ADAIME, Felipe Teófilo
ALASINO, Augusto José M.
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBORNOZ, Antonio
ALDERETE, Carlos Alberto
ALENDE, Oscar Eduardo
ALESSANDRO, Julio Darío
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Ángel
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGUI, Raúl Ángel
ALLEGHONE de FONTE, Norma
ARAMOUNI, Alberto
ARANDA, Saturnino Dantti
ARCIENAGA, Normando
ARGASARRAZ, Hernán Andrés
ARGANARAZ, Ricardo
ARMAGNAGUE, Juan Fernando
AUYERO, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AVILA, Mario Efraín
AVILA GALLO, Exequiel José B.
BADRAN, Julio
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIROJIAN, Isidra Roberto
BALANDA, Mariano Pedro
BALL LIMA, Guillermo Alberto
BARBEITO, Juan Carlos
BARRENO, Rómulo Víctor
BAUZA, Eduardo
BERCOVICH RODRÍGUEZ, Raúl
BIANCIOITTO, Luis Fidel
BISCIOITTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BOGADO, Flore Eleuterio
BONIFASI, Antonio Luis
BORDA, Osvaldo
HOTELLA, Gloria Inés
BOTTA, Felipe Esteban
BREST, Diego Francisco
BRIZUELA, Delfor Augusto
BULACIO, Julio Segundo
CAMBARERI, Horacio Vicente
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto
CANTOR, Rubén
CAPPELLERI, Pascual

CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARIGNANO, Raúl Eduardo
CARMONA, Jorge
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASAS, David Jorge
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLO, Domingo Felipe
ZEVALLO, Eduardo Rubén P.
CLERICI, Federico
COLLANTES, Genaro Aurelio
CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CRUCHAGA, Melchor Bené
CURI, Oscar Horacio
DALMAU, Héctor Horacio
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DE NICHILLO, Cayetano
DEL RÍO, Eduardo Alfredo
DÍAZ BANCALARI, José María
DI CAPRIO, Marcos Antonio
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TELLA, Guido
DUHALDE, Eduardo Alberto
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco de
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ENDEIZA, Eduardo A.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio
FAPPIANO, Oscar Luján
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ de QUARRACINO, Matilde
FERREYRA, Benito Orlando
FOLLONI, Jorge Oscar
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GERARDOZZI, Mario Alberto
GIACOSA, Luis Rodolfo
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Eduardo Aquiles
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo

GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GOROSTEGUI, José Ignacio
GUIDI, Emilio Esteban
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HUARTE, Horacio Hugo
IBARRIA, José María
IGLESIAS, Herminio
INGARAMO, Emilio Felipe
IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
JAROSLAVSKY, César
JUEZ PÉREZ, Antonio
KRAEMER, Bernhard
LARRABURU, Dámaso
LEMA MACHADO, Jorge
LENCINA, Luis Ascensión
LIZURUME, José Luis
LÓPEZ, José Remigio
LOZA, César Augusto
LUDER, Italo Argentino
LLORENS, Roberto
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KARTHY, César
MANRIQUE, Luis Alberto
MANZANO, José Luis
MARTÍNEZ, Gabriel Adolfo
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel J.
MATZKIN, Jorge Rubén
MÉNDEZ DOYLE de BARRIO, María L.
MERINO, Eubaldo
MONJARDÍN de MASCI, Ruth
MONSERRAT, Miguel Pedro
MOSCA, Carlos Miguel A.
MUGNOLO, Francisco Miguel
MULQUI, Hugo Gustavo
MUTTIS, Enrique Rodolfo
NACUL, Miguel Camel
NATALE, Alberto A.
NERI, Aldo Carlos
ORGAZ, Alfredo
ORTIZ, Pedro Carlos
OSOVNIKAR, Luis Eduardo
PACCE, Daniel Victorio
PAMPURO, José Juan B.
PARENTE, Rodolfo Miguel
PARRA, Luis Ambrosio
PASCUAL, Rafael Manuel
PAZ, Fernando Enrique
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PERA OCAMPO, Tomás Carlos

PÉREZ, René
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PRONE, Alberto Josué
 RAMÍREZ, Ernesto Jorge
 RAMOS, José Carlos
 RAPACINI, Rubén Abel
 SAUBER, Cleto
 REINALDO, Luis Anibal
 REQUEJO, Roberto Vicente
 RIUTORT, Olga E.
 RODRIGO, Juan
 RODRIGO, Osvaldo
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROJAS, Ricardo
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Julio
 ROSALES, Carlos Eduardo
 ROSSO, Carlos José
 ROY, Irma
 RUCKAUF, Carlos Federico
 SALDUNA, Bernardo Ignacio E.
 SALTO, Roberto Juan
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCASSANI, Benito Gandhi E.
 SELLA, Orlando Enrique
 SILVA, Roberto Pascual
 SIRACUSANO, Héctor
 SOCCI, Hugo Alberto
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA ARCE, José María
 STAVALE, Juan Carlos
 STORANI, Conrado Hugo
 STUBBIN, Marcelo
 TAPARELLI, Juan Carlos
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TOMA, Miguel Ángel

TOMASELLA CIMA, Carlos Lorenzo
 TORRES, Carlos Martín
 TORRES, Manuel
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TRIACA, Alberto Jorge
 VACA, Eduardo Pedro
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos
 VALERGA, Carlos María
 VANOLI, Enrique Néstor
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 VARGAS AIGNASSE, Rodolfo Marco
 VEGA ACIAR, José Omar
 VILLEGAS, Juan Orlando
 YOUNG, Jorge Eduardo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZOCCOLA, Elío Pablo
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

ARAMBURU, José Pedro
 CAVALLARI, Juan José
 GROSSO, Carlos Alfredo
 GUZMÁN, María Cristina
 MASINI, Héctor Raúl
 PUEBLA, Ariel
 PUGLIESE, Juan Carlos
 RODRIGUEZ, Jesús
 STORANI, Federico Teobaldo M.

AUSENTES, CON LICENCIA:

ABDALA, Luis Oscar
 ADAMO, Carlos
 BUDINO, Eduardo Horacio
 CARDO, Manuel
 CARRIZO, Víctor Eduardo

CASSIA, Antonio
 D'ALESSANDRO, Miguel Humberto
 DÍAZ, Manuel Alberto
 GONZALEZ, Alberto Ignacio
 LAZARA, Simón Alberto
 LESTELLE, Eugenio Alberto
 MANZUR, Alejandro
 MARÍN, Rubén Hugo
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 NUIN, Mauricio Paulino
 ORIETA, Gaspar Baltazar
 PUERTA, Federico Ramón
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RAMOS, Daniel Omar
 SILVA, Carlos Oscar
 SOTELO, Rafael Rubén
 ULLOA, Roberto Augusto

AUSENTES, SIN AVISO:

ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
 BELLO, Carlos
 CACERES, Luis Alberto
 CURTO, Hugo Omar
 DE LA SOTA, José Manuel
 FREYTES, Carlos Guido
 LAMBERTO, Oscar Santiago
 MILANO, Raúl Mario
 MIRANDA, Julio Antonio
 MOREYRA, Omar Demetrio
 POSSE, Osvaldo Hugo
 RÍQUEZ, Félix
 RODRÍGUEZ, José
 ROMERO, Roberto
 USIN, Domingo Segundo

Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 5723.)
2. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 5723.)
3. Licencias para faltar a sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 5724.)
4. Homenajes:
 - I. A la memoria de don Crisólogo Larralde. (Página 5724.)
 - II. A la memoria del ex diputado nacional doctor Justo Díaz Colodrero. (Pág. 5727.)
5. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 5728.)
6. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de sobre tablas:
 - I. Consulta del señor diputado Manzano acerca de una moción de tratamiento sobre tablas formulada durante la sesión del 16 de marzo de 1988. (Pág. 5729.)
 - II. Consideración de la moción del señor diputado Ruckauf de que se trate sobre tablas su proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de medidas para

acordar una jubilación mínima de 500 australes y reformular las escalas jubilatorias a partir del 1º de marzo de 1988 (3.038-D.-87). (Página 5729.)

7. Aclaración del señor diputado Jaroslavsky con referencia al debate suscitado al considerarse la moción a la que se refiere el número 6-II de este sumario. (Pág. 5739.)
8. Moción del señor diputado Durañona y Vedia de que la Presidencia proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del reglamento a raíz de expresiones vertidas durante el debate por el señor diputado Dumón. (Pág. 5739.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley en revisión por el que se establece el régimen legal de las asociaciones sindicales de trabajadores (37-S.-87). (Pág. 5739.)
10. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Silva (R.P.) con motivo de declaraciones efectuadas por el señor gobernador de la provincia de Santa Fe (3.188-D.-87). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 5763.)
11. Manifestaciones del señor diputado Carignano con motivo de la cuestión a la que se refiere el número 10 de este sumario. (Pág. 5764.)

12. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Se sanciona definitivamente (ley 23.551). (Pág. 5764.)
13. Solicitud del señor diputado Jaroslavsky de que se le conceda el uso de la palabra para formular una moción de orden y pedido de los señores diputados Cardozo y Monserrat de que se postergue dicha moción a fin de dar lugar al tratamiento de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. (Pág. 5773.)
14. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución del señor diputado Monserrat y otros (2.827-D.-87) y en los proyectos de declaración de los señores diputados Auyero y Aramouni (2.839-D.-87), Monserrat y otros (2.973-D.-87) y Strani (F. T. M.) (3.080-D.-87) relativos a la actual situación imperante en la República de Panamá. Se sanciona un proyecto de declaración. (Pág. 5774.)
15. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 5775.)
16. Apéndice:
 - A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 5775.)
 - B. Asuntos entrados:
 - I. Mensajes del Poder Ejecutivo:
 1. Mensaje 367: inclusión de nuevos temas a considerarse dentro del actual período extraordinario de sesiones (72-P.E.-87). (Pág. 5784.)
 2. Mensaje 370 y proyecto de ley: régimen legal de la factura conformada (73-P.E.-87). (Pág. 5784.)
 3. Mensaje 375 y proyecto de ley: otorgamiento de pensiones gratificables vitalicias a ex combatientes del Atlántico Sur (74-P.E.-87). (Pág. 5785.)
 4. Mensaje 360 y proyecto de ley: ratificación del decreto acuerdo 2.192/86, sobre remuneración de los agentes públicos (75-P.E.-87). (Pág. 5786.)
 5. Mensaje 376 y proyecto de ley: modificación del artículo 1º de la ley 19.931 a fin de incluir a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro entre las entidades autorizadas para utilizar el procedimiento de microfiliación en su documentación (76-P.E.-87). (Pág. 5786.)
 6. Mensaje 362 y proyecto de ley: aprobación de la convención internacional sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (77-P.E.-87). (Pág. 5787.)
 7. Mensaje 377 y proyecto de ley: otorgamiento de tierras en jurisdicción

de la Reserva Nacional Lanín a la comunidad mapuche curruhuinca (78-P.E.-87). (Pág. 5815.)

8. Mensaje 374 y proyecto de ley: donación de veinte yeguas de cría destinadas al mejoramiento de la yeguada de los haras militares de la República Oriental del Uruguay (79-P.E.-87). (Pág. 5817.)

- II. Dictámenes de comisiones. (Pág. 5817.)
- III. Dictámenes observados. (Pág. 5818.)
- IV. Comunicaciones de comisiones. (Pág. 5818.)
- V. Comunicaciones de señores diputados. (Página 5818.)
- VI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 5818.)
- VII. Peticiones particulares. (Pág. 5819.)
- VIII. Proyectos de ley:

1. Del señor diputado Zubiri: modificación del artículo 33 de la ley 17.531, de servicio militar obligatorio (3.065-D.-87). (Pág. 5820.)
2. De los señores diputados Moreyra y Sotelo: declaración de utilidad prioritaria nacional para el desarrollo de la cuenca del río Bermejo, a la construcción del complejo hidroeléctrico en Zanja del Tigre, provincia de Salta (3.093-D.-87). (Página 5820.)
3. Del señor diputado Avalos: subsidio a las Religiosas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora, de San Isidro, provincia de Catamarca (3.104-D.-87). (Pág. 5822.)
4. Del señor diputado Salduna: modificación del artículo 72 del Código Penal, sobre acciones dependientes de instancia privada (3.113-D.-87) (Pág. 5822.)
5. Del señor diputado Salduna: derogación de los artículos 74 y 118 y del inciso 1º del artículo 73 del Código Penal, sobre adulterio (3.114-D.-87). (Pág. 5823.)
6. Del señor diputado Salduna: creación de la Secretaría de Integración en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (3.115-D.-87). (Pág. 5823.)
7. Del señor diputado Salduna: declaración como zona de promoción a la subregión de Salto Grande integrada por los departamentos de

previsión social, pero si sabemos que hay jubilados muertos de hambre.

Sr. Presidente (Duhalde). — La Presidencia informa que ha vencido el término destinado a pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de sobre tablas, quedando la lista de oradores pendiente para la próxima sesión.

7

ACLARACION

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: deseo aclarar que esta historia no ha terminado aquí y que todo lo que se ha escuchado va a ser respondido en la próxima sesión, porque los señores diputados de la oposición han utilizado el tiempo de una manera discrecional.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Jaroslavsky. — Aquí esto no terminó; en la próxima sesión los amigos de la bancada justicialista podrán explicarnos lo bien que administran las provincias que ahora están atravesando una situación desastrosa.

8

MOCION

Sr. Durañona y Vedia. — Pido la palabra para formular una cuestión de orden.

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Se trata de una cuestión reglamentaria. El señor diputado Dumón dijo en su exposición que los señores diputados que estaban de acuerdo con tratar sobre tablas el proyecto de resolución del señor diputado Ruckauf estaban haciendo este debate sobre la miseria de los jubilados. Esto significa atribuir imputaciones de móviles ilegítimos hacia las Cámaras del Congreso y sus miembros, lo cual está absolutamente prohibido por el artículo 165 del reglamento.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Durañona y Vedia. — Creo que el señor diputado Dumón no habrá de insistir en tales

graves conceptos que afectan el decoro de la Cámara, porque ello significa —como acabo de decir— realizar imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos, que están expresamente prohibidas por el reglamento y que deben motivar una decisión de la Cámara.

¡También podría decir yo que peor que aquello es rehuir el debate a costa de esa misma miseria!

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Duhalde). — Concrete su moción, señor diputado.

Sr. Durañona y Vedia. — Formulo moción de que la Presidencia requiera al señor diputado el retiro de sus expresiones, o en su defecto, que la Cámara resuelva sobre esta grave transgresión al reglamento y al respeto que nos debemos los miembros de este cuerpo.

Sr. Jaroslavsky. — ¡Plantee una cuestión de privilegio, señor diputado!

Sr. Durañona y Vedia. — Tengo derecho a formular esta moción. El artículo 200 del reglamento dice que "todo diputado puede reclamar al presidente la observancia de este reglamento, si juzga que se contraviene a él", y las palabras que se pronunciaron en este recinto violan lo dispuesto en el artículo 165 del reglamento, que prohíbe las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia las Cámaras del Congreso y sus miembros. Entonces, tengo derecho a plantear esta cuestión en defensa del decoro de la Cámara.

Sr. Presidente (Duhalde). — En razón de que la Presidencia entiende que el señor diputado ha planteado indebidamente la cuestión, se pasará al orden del día.

Sr. Durañona y Vedia. — Entiendo lo contrario de la Presidencia.

9

REGIMEN LEGAL DE LAS ASOCIACIONES
SINDICALES DE TRABAJADORES

Sr. Presidente (Duhalde). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley en revisión por el que se establece el régimen legal de las asociaciones sindicales de trabajadores (expediente 37-S.-87).

Por Secretaría se dará lectura del dictamen.

Sr. Secretario (Bravo). — Dice así:

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre "Régimen para las asociaciones sindicales de trabajadores"; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción.

Sala de la comisión, 23 de marzo de 1988.

Oswaldo Borda. — Francisco M. Mugnolo. — Ricardo Rojas. — Rodolfo M. Parente. — Julio S. Bulacio. — Antonio Albornoz. — Victorio O. Bisciotti. — Pascual Cappe-lleri. — Ignacio L. R. Cardozo. — José L. Castillo. — Julio C. Corzo. — José M. Díaz Bancalari. — Roberto S. Digón. — Nemecio C. Espinoza. — Guillermo E. Estévez Boero. — Roberto J. García. — Joaquín V. González. — Luis A. Manrique. — Luis E. Osovnikar. — Rafael M. Pascual. — Lorenzo A. Pepe.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1988.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO PRELIMINAR

De la tutela de la libertad sindical

Artículo 1º — La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.

Art. 2º — Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley.

Art. 3º — Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.

Art. 4º — Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales:

- a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales;
- b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse;
- c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales;
- d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores;
- e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.

Art. 5º — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos:

- a) Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados ni aquellos que pudieran inducir a error o confusión;
- b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial;
- c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya constituidas o desafiliarse;
- d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical.

Art. 6º — Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente.

Art. 7º — Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados.

Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una asociación de grado superior y otra de grado inferior.

Art. 8º — Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar:

- a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus afiliados;
- b) Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego, de su gestión;
- c) La efectiva participación de los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
- d) La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos.

Art. 9º — Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.

Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales.

I

De los tipos de asociaciones sindicales

Art. 10. — Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por:

- a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines;

- b) Trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas;
- c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa.

Art. 11. — Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas:

- a) Sindicatos o uniones;
- b) Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado;
- c) Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que preceden a éste.

II

De la afiliación y desafiliación

Art. 12. — Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberán conformarse a la misma.

Art. 13. — Las personas mayores de catorce años, sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.

Art. 14. — En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán por esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones que el estatuto establezca.

Art. 15. — El trabajador que dejare de pertenecer a una asociación sindical no tendrá derecho al reintegro de las cuotas o aportes abonados. Lo dispuesto será aplicable a las relaciones entre asociaciones de diverso grado.

III

De los estatutos

Art. 16. — Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8º y contener:

- a) Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación;
- b) Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que represente;
- c) Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación, que garanticen el derecho de defensa;
- d) Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimiento para la designación y reemplazos de los directivos e integrantes de los congresos;
- e) Modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución, y régimen de cotizaciones de sus afiliados y contribuciones;

f) Época y forma de presentación, aprobación y publicación de memorias y balances; órganos para su revisión y fiscalización;

g) Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociacionales, avales que superen el tres por ciento (3 %) de sus afiliados;

h) Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos;

i) Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical;

j) Procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de la asociación.

IV

Dirección y administración

Art. 17. — La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto.

Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo derecho a ser reelegidos.

Art. 18. — Para integrar los órganos directivos, se requerirá:

- a) Mayoría de edad;
- b) No tener inhabilidades civiles ni penales;
- c) Estar afiliado, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.

El setenta y cinco por ciento (75 %) de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos, el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.

V

De las asambleas o congresos

Art. 19. — Las asambleas y congresos deberán reunirse:

- a) En sesión ordinaria anualmente;
- b) En sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano directivo de la asociación, por propia decisión o a solicitud del número de afiliados o delegados congresales que fije el estatuto, el que no podrá ser superior al quince por ciento (15 %) en asamblea de afiliados y al treinta y tres por ciento (33 %) en asambleas de delegados congresales.

Art. 20. — Será privativo de las asambleas o congresos:

- a) Fijar criterios generales de actuación;

- b) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo;
- c) Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances; la fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones, nacionales o internacionales;
- d) Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir el informe de su desempeño;
- e) Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados

VI

De la inscripción

Art. 21. — Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar:

- a) Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación;
- b) Lista de afiliados;
- c) Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo;
- d) Estatutos.

Art. 22. — Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa días de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial.

VII

De los derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales

Art. 23. — La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:

- a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados;
- b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial;
- c) Promover:
 - 1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
 - 2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social
 - 3º La educación general y la formación profesional de los trabajadores;
- d) Imponer cotizaciones a sus afiliados;
- e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa.

Art. 24. — Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la autoridad administrativa del trabajo:

- a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos del control de la legalidad;
- b) La integración de los órganos directivos y sus modificaciones;
- c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia autenticada de la memoria, balance y nómina de afiliados;
- d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en los plazos estatutarios;
- e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a efectos de su rubricación.

VIII

De las asociaciones sindicales con personería gremial

Art. 25. — La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Se encuentre inscrita de acuerdo a lo prescrito en esta ley y haya actuado durante un período no menor de seis (6) meses;
- b) Afilie a más del veinte por ciento (20 %) de los trabajadores que intente representar.

La calificación de más representatividad se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar.

Los promedios se determinarán sobre los seis (6) meses anteriores a la solicitud.

Al reconocerse personería gremial, la autoridad administrativa del trabajo o judicial, deberá precisar el ámbito de representación personal y territorial. Estos no excederán de los establecidos en los estatutos, pero podrán ser reducidos si existiere superposición con otra asociación sindical.

Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento del artículo 28. La omisión de los recaudos indicados determinará la nulidad del acto administrativo o judicial.

Art. 26. — Cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa del trabajo dictará resolución dentro de los noventa (90) días.

Art. 27. — Otorgada la personería gremial se inscribirá la asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el Boletín Oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos.

Art. 28. — En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, sólo podrá concederse igual personería a otra asociación,

para actuar en la misma zona y actividad o categoría, en tanto que la cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, durante un período mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores a su presentación, fuere considerablemente superior a la de la asociación con personería preexistente.

Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza su defensa y ofrezca pruebas.

De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán con el control de ambas asociaciones.

Cuando se resolviere otorgar la personería a la solicitante, la que la posea continuará como inscrita.

La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando mediare conformidad expresa del máximo órgano deliberativo de la asociación que la posea.

Art. 29. — Sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa, cuando no opere en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión.

Art. 30. — Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de oficio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele si existieran intereses sindicales diferenciados como para justificar una representación específica y se cumplieren los requisitos exigidos por el artículo 25, y siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores.

Art. 31. — Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial:

- a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
- b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas;
- c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;
- d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;
- e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;
- f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.

IX

De las federaciones y confederaciones

Art. 32. — Las federaciones y confederaciones más representativas adquirirán personería gremial en las condiciones del artículo 25.

Art. 33. — Se considerarán federaciones más representativas las que estén integradas por asociaciones de primer grado que afilien a la mayor cantidad de los trabajadores cotizantes comprendidos en su ámbito.

Se considerarán confederaciones más representativas las que afilien a entidades con personería gremial que cuenten con la mayor cantidad de trabajadores cotizantes.

Art. 34. — Las federaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos que la presente ley acuerda a las asociaciones de primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en relación a los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de las mismas.

Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán representar a las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en toda tramitación de índole administrativa, pudiendo a tal efecto deducir y proseguir los recursos que fuese conveniente interponer y adoptar las medidas que hubiere menester para la mejor defensa de los derechos de las mismas.

Art. 35. — Las federaciones con personería gremial podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas donde no actúe una asociación sindical de primer grado con personería gremial.

Art. 36. — El máximo órgano deliberativo de las asociaciones sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las de grado inferior sólo cuando los estatutos consagren esta facultad y por las causales que dichos estatutos determinen, garantizando el debido proceso. Esta resolución será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

X

Del patrimonio de las asociaciones sindicales

Art. 37. — El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:

- a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y las contribuciones de solidaridad que se pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas;
- b) Los bienes adquiridos y sus frutos;
- c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta ley.

Art. 38. — Los empleadores estarán obligados a actuar como "agentes de retención" de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciera, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como "agente de retención", o —en su caso— de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.

Art. 39. — Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en los artículos 5º y 23, estarán exentos de toda tasa, gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática y por la sola obtención de dicha personería gremial.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará con los gobiernos provinciales y por su intermedio de las municipalidades, que recepten en su régimen fiscal el principio admitido en este artículo.

XI

De la representación sindical en la empresa

Art. 40. — Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares, ejercerán en los lugares de trabajo o según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente representación:

- a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical;
- b) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.

Art. 41. — Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:

- a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaran.

Quando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscrita.

En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año;

- b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a repre-

sentar, la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporaria.

Art. 42. — El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del diez por ciento (10%) del total de los representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de los delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios de la asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.

Art. 43. — Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 40 de esta ley, tendrán derecho a:

- a) Verificar la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo;
- b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante;
- c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de la asociación sindical respectiva.

Art. 44. — Sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados a:

- a) Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario;
- b) Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndolos representar;
- c) Conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicable.

Art. 45. — A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:

- a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) representante;
- b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes;
- c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior.

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un (1) delegado por turno, como mínimo.

Cuando la representación sindical esté compuesta por tres o más trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado.

Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos.

Art. 46. — La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá posibilitar una adecuada tutela de los intereses y derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la diversidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la organización de la explotación o del servicio.

XII

De la tutela sindical

Art. 47. — Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.

Art. 48. — Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejen de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.

El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedios de remuneraciones.

Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.

Art. 49. — Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberán observar los siguientes requisitos:

- a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales;
- b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita.

Art. 50. — A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de

trabajo, por el término de seis (6) meses. Esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos.

Art. 51. — La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley.

Art. 52. — Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.

La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.

Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliera con la decisión firme, las disposiciones del artículo 666 bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad.

El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.

La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización y salarios caídos allí previstas. El curso de la prescripción comenzará una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.

XIII

De las prácticas desleales

Art. 53. — Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los representen:

- a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores;
- b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo;
- c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas;
- d) Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical;
- e) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales;
- f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación;
- g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley;
- h) Negarse a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremiales;
- i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen, cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal;
- j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen;
- k) Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo.

Art. 54. — La asociación sindical de trabajadores o el damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querrela por práctica desleal ante el juez o tribunal competente.

Art. 55. —

- 1^o Las prácticas desleales se sancionarán con multas, que serán fijadas de acuerdo con los artículos 4^o y siguiente de la ley 18.694 de in-

fracciones a las leyes de trabajo, salvo las modificaciones que aquí se establecen.

En el supuesto de prácticas desleales múltiples o de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el quintuplo del máximo previsto en la ley 18.694.

- 2^o Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades representativas de empleadores, la multa será fijada razonablemente por el juez hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento de los ingresos provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción.

Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del efectivo pago, de acuerdo con las disposiciones sobre índice de actualización de los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser reparada mediante el cese de la medida que la hubiere producido o la realización de los actos que resulten idóneos, conforme a la decisión calificadora, y el infractor mantuviera las medidas o dejare de cumplir los actos tendientes a la cesación de sus efectos, el importe originario se incrementará automáticamente en un diez por ciento por cada cinco días de mora, mientras se mantenga el incumplimiento del empleador o entidad representativa de los empleadores.

Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto por el artículo 666 bis del Código Civil, quedando los importes que así se establezcan en favor del damnificado.

- 3^o El importe de las multas será percibido por la autoridad administrativa del trabajo, e ingresado en una cuenta especial, y será destinado al mejoramiento de los servicios de inspección del trabajo, a cuyo fin la autoridad administrativa tomará intervención en el expediente judicial, previa citación del juez.
- 4^o Cuando la práctica desleal fuere reparada mediante el cese de los actos motivantes, dentro del plazo que al efecto establezca la decisión judicial, el importe de la sanción podrá reducirse hasta el cincuenta por ciento.

XIV

De la autoridad de aplicación

Art. 56. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará facultado para:

- 1^o Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos.
- 2^o Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen:
 - a) Violación de las disposiciones legales o estatutarias;
 - b) Incumplimiento a disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de facultades legales.

3º Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la intervención de una asociación sindical, en los siguientes supuestos:

- a) Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el inciso 2º de este artículo;
- b) Cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha incurrido en graves irregularidades administrativas. En el proceso judicial será parte la asociación sindical afectada. No obstante lo antes prescrito, cuando existiera peligro de serios perjuicios a la asociación sindical o a sus miembros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación podrá solicitar judicialmente medidas cautelares a fin que se disponga la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y se designe un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades que determinan se adopte esa medida cautelar.

4º Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en las asociaciones sindicales de trabajadores tienen a su cargo el gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen estos últimos, como así también ejecutar los demás actos que hubiere menester para que mediante el proceso electoral se designen a los integrantes de esos cuerpos. Al efecto asimismo podrá nombrar las personas que deban ejecutar esos actos. Todo ello cuando el órgano de la asociación facultado para ejecutarlo, después que hubiese sido intimado para que lo hiciera, dentro de un lapso determinado incumpliera el requerimiento.

En caso de que se produjere un estado de afección con relación a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de que se trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya previsto el modo de regularizar la situación, la autoridad de aplicación también podrá designar un funcionario para que efectúe lo que sea necesario para regularizar la situación. Por su parte si el órgano encargado de convocar a reunión de la asamblea de la asociación o al congreso de la misma, no lo hubiere hecho en el tiempo propio, y ese órgano no dé cumplimiento a la intimación que deberá cursársele para que lo efectúe, la autoridad de aplicación estará facultada para hacerlo para adoptar las demás medidas que correspondan para que la reunión tenga lugar.

Art. 57. — En tanto no se presente alguna de las situaciones antes previstas, la autoridad administrativa del trabajo no podrá intervenir en la dirección y ad-

ministración de las asociaciones sindicales a que se refiere esta ley, y en especial restringir el manejo de los fondos sindicales.

Art. 58. — El control de las asociaciones sindicales, aunque hubieren obtenido personería jurídica en virtud de las disposiciones del derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Art. 59. — Para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren.

Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso de silencio lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.549 y su reglamentación. Agotado el procedimiento administrativo, quedará expedita la acción judicial prevista en el artículo 62, inciso e) de la presente ley.

La resolución de encuadramiento, emane de la autoridad administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La resolución que ponga fin al conflicto de encuadramiento sindical sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la asociación gremial respectiva con relación al ámbito en conflicto.

Art. 60. — Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos, en los diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una asociación sindical de trabajadores y ésta, o entre una asociación de grado inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 61. — Todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley.

Art. 62. — Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos:

- a) Las acciones que promueva la autoridad administrativa del trabajo;
- b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre otorgamiento, de personería gremial, encuadramiento sindical u otros actos administrativos de igual carácter, una vez agotada la instancia administrativa;
- c) La demanda por denegatoria tácita de una personería gremial;
- d) La demanda por denegatoria tácita de una inscripción;
- e) Las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por haber vencido el plazo esta-

blecido para que se pronuncie la autoridad administrativa, sin que ésta lo hubiera hecho

- f) Los recursos previstos en el artículo 36 de esta ley.

Las acciones de los incisos a), c), d) y e) del párrafo anterior se sustanciarán por las normas del proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En este proceso la Cámara podrá ordenar las medidas para mejor proveer que considere convenientes. Asimismo proveerá la producción de las pruebas ofrecidas por las partes que sean conducentes, pudiendo disponer su recepción por el juzgado de primera instancia que corresponda, el que deberá elevar las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada su sustanciación.

Las acciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo deberán deducirse dentro de los ciento veinte (120) días hábiles del vencimiento del plazo otorgado a la autoridad administrativa para resolver.

Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e interponerse ante la autoridad administrativa, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la resolución. Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la interposición del recurso, la autoridad administrativa deberá remitir a esa Cámara las respectivas actuaciones. Cuando la decisión recurrida afecte los alcances de una personería, radicado el expediente en sede judicial, deberá darse traslado a las asociaciones afectadas, por el término de cinco (5) días.

Art. 63. —

- 1º Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en:

- a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales;
- b) Las acciones previstas en el artículo 52.
- c) En las acciones previstas en el artículo 47.

- 2º Estas acciones se sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legislación local.

Art. 64. — Las asociaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada su reglamentación, la que deberá ser dictada dentro de los noventa (90) días por el Poder Ejecutivo nacional.

Mientras no se realice la mencionada adecuación y su aprobación por la autoridad administrativa, prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la presente ley sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.

Art. 65. — La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Art. 66. — Derógase la ley de facto 22.105 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 67. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

VICTOR H. MARTÍNEZ.
Antonio J. Maerís.

INFORME

Honorable Cámara.

La Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley que regula la creación, funcionamiento y actividades de las asociaciones sindicales de trabajadores y que cuenta con la aprobación del Honorable Senado.

Si bien esta Honorable Cámara recibe dicho proyecto en revisión, el mismo reproduce casi textualmente el que fuera sancionado el 15-7-87 (expedientes 24-P.E.-87 y 116-S.-86; Orden del Día Nº 1.148/87). E lo nos exime de abundar en mayores consideraciones, ya que el tema fue intensamente debatido en su oportunidad. Las modificaciones introducidas en ese proyecto por el Honorable Senado —bajo la forma de un nuevo proyecto de ley— han sido materia de un consenso que permitió superar posiciones encontradas, sin perjuicio de la opinión particular de cada legislador.

De tal forma, tenemos ahora la oportunidad de sancionar un nuevo régimen legal que encuadre jurídicamente la vida de las organizaciones gremiales, en reemplazo de la ley de facto 22.105, que pretendió ser un instrumento destinado al debilitamiento de las estructuras sindicales. Ello es motivo más que suficiente para soslayar algunos reparos que la nueva legislación pueda eventualmente generar en los señores diputados.

Por las razones expuestas y las que expondrá el miembro informante en el seno de la Honorable Cámara, la Comisión de Legislación del Trabajo aconseja la aprobación del referido proyecto de ley.

Oswaldo Borda.

Sr. Presidente (Duhalde). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: la Comisión de Legislación del Trabajo ha considerado el proyecto de ley sobre asociaciones gremiales de trabajadores, que fue pasado en revisión al Honorable Senado, y ha dictaminado en favor de su aprobación.

De aceptarse este dictamen la democracia habrá superado la situación de mora legislativa en que se encuentra en relación con los trabajadores. Han debido transcurrir más de cuatro años para que el país pueda contar con una ley gremial que reemplace la ley de la dictadura militar.

El nuevo instrumento legal es el fruto de la madurez alcanzada por la clase dirigente en ese lapso. Para fundamentar esto, me limito a recordar el tristemente célebre proyecto Mucci y compararlo con el que hoy estamos considerando.

Este es un proyecto de ley consensuado y, como tal, tiene las virtudes y los defectos de todo aquello que es producto de acuerdos polí-

ticos, en los que la transacción implica para las partes la realización de recíprocas concesiones. Por lo tanto, a nadie debe extrañar que no exista en los interesados plena satisfacción con el resultado final obtenido.

Sr. Natale. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Borda. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: el señor diputado Borda acaba de manifestar que estamos considerando un proyecto de ley que fue pasado en revisión al Honorable Senado.

A tenor de la comunicación cursada por la Cámara alta, surge que ella ha actuado como cámara de origen, y nosotros como revisora en este preciso momento.

Entonces, quisiera saber cuál es la interpretación correcta: ¿la del diputado Borda o la que se desprende de la comunicación enviada por el Honorable Senado?

Sr. Presidente (Duhalde). — Esta Cámara está considerando en revisión un proyecto que tuvo su origen en la Cámara de Senadores.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — No es éste el proyecto de ley que el movimiento obrero hubiera deseado, pero creo no equivocarme si digo que es el mejor que en las actuales circunstancias políticas se puede pretender.

El largo e intenso proceso de negociación, con sus marchas y contramarchas, determinó el sacrificio de un preciosismo técnico sólo alcanzable desde la unidad conceptual del autor individual. Pero ello —incluso alguna deficiencia que se pueda detectar en la redacción— es un precio pequeño que hay que pagar para tener, de una vez por todas, una norma que elimine todo el contenido autoritario de la actual legislación, garantizando la libertad y la autonomía sindical.

Si aquéllos pueden ser los defectos propios de una norma consensuada, como contrapartida se obtendrá una ley que gozará de la legitimidad que le otorga el hecho de haber sido aprobada por los representantes de la inmensa mayoría del país.

El proyecto que estamos analizando es sustancialmente idéntico al aprobado por esta Honorable Cámara en julio del año pasado. Las reformas introducidas por el Honorable Sena-

do se limitan a dos cuestiones puntuales: la cantidad de representantes gremiales en la empresa y la terminología utilizada para referirse a las medidas de acción sindical. Ambos temas han tenido amplia difusión por los medios masivos de comunicación social y han sido suficientemente debatidos.

Por lo tanto, he creído innecesario referirme en esta oportunidad en forma pormenorizada al contenido del proyecto de ley. Sólo deseo rescatar por su inmensa significación y trascendencia una norma que pareciera que ha pasado desapercibida: el artículo 3º, que define el objeto de los sindicatos y de la acción gremial en los siguientes términos: "Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador".

Por primera vez en la legislación argentina queda expresamente aclarado que la función de los sindicatos no se agota en el tema de los salarios y de las condiciones laborales del trabajador, sino que su accionar debe estar dirigido a la defensa de todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida.

Queda así superado el debate sobre lo que debía entenderse por intereses profesionales de los trabajadores, que era la fórmula utilizada por las distintas leyes que pretendieron regular el fenómeno sindical y que fue usada por algunos para intentar encorsetar la actividad gremial en pequeños compartimientos estancos. Por el contrario, el nuevo texto legal reconoce que para el sindicalismo el trabajador no puede ser considerado como un mero prestador de trabajo, sino como una persona integrada a una comunidad familiar y a una comunidad laboral. partes, a su vez, de la comunidad nacional.

En esto reside la diferencia fundamental entre los sindicatos y las otras organizaciones sociales intermedias que toman al individuo en función de los intereses sectoriales o profesionales y no de su universalidad humana.

El viejo concepto del sindicato como entidad que buscaba equipararse al poder del empleador para negociar con él se encuentra totalmente superado. La intervención del Estado como protagonista de la economía, manejando diversos medios de regulación que escapan a la materia negociable en las convenciones colectivas, ha determinado una alteración en el plano de actuación del sindicalismo.

Hoy es una legítima aspiración del movimiento obrero organizado no estar excluido del nivel

de decisión en el que la política económica adopta criterios tales como el de la distribución del ingreso nacional.

Es impensable que el sindicalismo pueda permanecer ajeno a la planificación económica mediante la que se fijarán las políticas sobre producción, salarios, ocupación, precios, consumo, etcétera, que se vinculan directamente con los intereses de la clase obrera. Por ello, el sindicalismo ya no puede limitarse a negociar con los empleadores, dado que la satisfacción de esos intereses excede las posibilidades de estos últimos.

Difícilmente el Estado incorporará a sus políticas distributivas la consideración de dichos intereses si no tiene enfrente a quien los represente con fuerza suficiente como para cuestionar con éxito sus decisiones.

Sr. Garay. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Borda. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: a fin de facilitar la comprensión del tema en debate, solicito que se nos haga llegar copia del dictamen de comisión recaído sobre el proyecto de ley venido en revisión del Senado.

Sr. Presidente (Duhalde). — Se harán llegar las copias que solicita, señor diputado.

Continúa en uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Es decir que la defensa y mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, como objetivo natural de las organizaciones gremiales, lleva necesariamente a éstas a una actuación que supera ampliamente el plano meramente reivindicativo. Se trata de una actuación política que se desarrolla frente al Estado y a los demás poderes —internos y externos— que se vinculan con la existencia de un determinado orden social.

Por lo tanto, a partir del reconocimiento expreso de que los sindicatos tienen por objeto luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, debiendo la acción sindical contribuir a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador, llegamos al reconocimiento implícito de la legitimidad de su actuación política. Y como en el sistema democrático occidental no hay política sin partidos políticos, también queda implícita la legitimidad de su actuación partidaria.

Vale recordar que la actuación de los sindicatos en política comienza a ser cuestionada

en nuestro país a partir de 1945, cuando se produce la unidad y nacionalización del movimiento obrero. Fue entonces cuando aparecieron los teóricos del apoliticismo sindical. Antes a nadie se le habría ocurrido prohibir que un sindicato fuera comunista, socialista o anarquista. Pero se produce el "hecho maldito": el peronismo, con fuerza suficiente, por doctrina y base social, como para confrontar con los poderes dominantes en nuestra sociedad. A partir de ahí, todos aquellos que toleraban en los sindicatos la filiación a ideologías extranjeras se oponen tenazmente a su adhesión a una doctrina nacional.

Interpreto que con la vigencia del artículo 3º de este proyecto de ley esta cuestión quedará definitivamente zanjada.

Señor presidente: como diputado de extracción sindical entiendo que al decir la norma que la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la plena realización del trabajador, no se les está otorgando a las organizaciones gremiales un derecho, sino que se les está dando un mandato. Asumirlo como tal significa para el sindicalismo plantearse en qué consiste la plena realización del trabajador y cuáles son los obstáculos que se oponen a ella. La respuesta a ambos interrogantes demandaría un tiempo que excede las posibilidades de este discurso. No obstante, podemos aproximarnos al tema afirmando que la sociedad a la que aspiramos debe brindar a todos los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejercicio de su profesión, participando en las decisiones y en las responsabilidades en todos los niveles. El acceso a las responsabilidades es una exigencia fundamental de la naturaleza del hombre, un ejercicio concreto de su libertad y un camino para su desarrollo.

En este plano el trabajador no puede ser considerado como un simple objeto, sometido a las frías leyes del mercado y al uso arbitrario de los demás, sino como un hombre en todos los sectores de la sociedad; esto es, en el orden económico y social, en el político y en el cultural. Su plena realización se alcanzará cuando tenga garantizado el acceso a los bienes materiales y espirituales de la comunidad. Para ello, la justicia social deberá ser el principio rector de los criterios de distribución de cargas y beneficios.

Muchos son, sin duda, los obstáculos a remover para alcanzar ese orden social más justo al que aspiramos. Nuestra sociedad mantiene en general las principales características de la sociedad capitalista, y la crisis económica ha puesto en evidencia la existencia de graves injusti-

cias sociales. La "libertad" del liberalismo económico sólo ha significado permisividad para acumular riquezas sin finalidad social, restricción jurídica ni escrúpulos morales. La propiedad privada de los medios de producción es considerada como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes.

Todo ello ha originado una estructura social caracterizada por su evidente inequidad e injusticia, en la que se profundiza cada vez más la brecha entre ricos y pobres y en la que el lujo de unos pocos es un agravio a la miseria de muchos.

No habrá posibilidades de realización para casi nadie mientras la realidad del país nos muestre a nuestros niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer; a nuestros jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; a los trabajadores, desempleados, subempleados o mal retribuidos; a los marginados urbanos, sometidos al doble impacto de su pobreza frente a la ostentación de riqueza de otros; y, por último, a nuestros jubilados, olvidados por una sociedad que prescinde de aquellos que ya no producen.

Es decir que la primera valla que se opone a la realización plena del trabajador es la propia estructura social. Por lo tanto, la acción sindical debe contribuir a su transformación y jamás conformarse con una correcta o eficiente administración de la crisis. Una sociedad materialista, individualista, con desigualdades chocantes y valores perversos, con clases dominantes rapaces y frívolas como pocas, no puede ser cambiada partiendo del discurso de la resignación o de la apelación constante al realismo.

Seguramente el sindicalismo deberá recurrir en ese accionar transformador a diversas medidas de acción directa. El nuevo texto legal aprobado por el Senado ha sustituido este término por el de medidas legítimas de acción sindical. Aunque personalmente no asigno trascendencia al cambio, muchos pretenderán ver en él un principio de reglamentación del derecho de huelga. Son aquellos que sostienen su necesidad, alegando que si se pudiera gozar sin ninguna restricción de los derechos —o sea, si éstos fueran absolutos— se destruiría el orden social.

Ello significa que para que el movimiento obrero acepte la reglamentación del derecho de huelga, primero debe aceptar la necesidad de preservar el orden social vigente, y —como hemos visto— estamos muy lejos de ello.

Señor presidente: los trabajadores celebramos la sanción de una nueva ley de asociaciones gremiales que sustituya la legislación de la dictadura militar, pero con el convencimiento de que

esto no es un punto de llegada sino un punto de partida en la lucha del sindicalismo por un orden social más justo.

Por todo lo expuesto, solicito a la Honorable Cámara que apruebe este proyecto de ley veniendo en revisión del Honorable Senado. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mugnolo. — Señor presidente: compartimos plenamente el dictamen de la comisión. También estamos de acuerdo con algunos argumentos del señor miembro informante.

Esta iniciativa es positiva, porque constituye un resultado que hemos podido alcanzar por consenso. Quiero que tengamos en cuenta este aspecto porque se vincula con algunas reflexiones que haremos posteriormente. Este es un proyecto que no se ha impuesto desde el gobierno. Se trata de una iniciativa que hemos logrado con el esfuerzo del conjunto, basándonos en la razón y en la comprensión.

Por eso me parece importante que efectuemos algunas referencias a cómo hemos llegado a estar de acuerdo con este proyecto. Diría que ello es consecuencia de las vivencias que los argentinos hemos experimentado casi desde el principio de este siglo. No voy a hacer un prolongado *racconto*, pero quiero decir que este proyecto es la consecuencia de lo mucho que han tenido que conquistar los trabajadores.

Desde aquellas primeras manifestaciones que ha tenido la trayectoria de las organizaciones sindicales —impulsadas por aquellos extranjeros pioneros, que en la expresión de Augusto Kuhn dejaron de ser extranjeros en el instante en que se aprestaron a luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida del proletariado argentino y por el progreso institucional de la República—, mucho fue lo que los trabajadores debieron conquistar para que la legislación dejara de expresar una actitud represiva o limitativa de las organizaciones sindicales.

Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, desde el gobierno y fuera de él acompañó esta acción sindical, reconoció el valor de las organizaciones sindicales, elaboró su propia visión del rol sindical y de su relación con el Estado, vinculándola a la concepción del sindicato-clase, a su tradición democrática y pluralista y a la no intervención del Estado ni de los partidos políticos en la vida de las organizaciones sindicales.

Esta interpretación inicial se relaciona con los orígenes de nuestro partido y con la realidad política que expresó precisamente en forma contemporánea con la incipiente presencia de las

organizaciones sindicales, por entonces fuertemente influidas por concepciones dogmáticas pero que la Unión Cívica Radical valoraba como instrumento idóneo para alcanzar la defensa y el desarrollo de los derechos de los trabajadores.

Ratificación de ello fue justamente una iniciativa del presidente Yrigoyen, que es bueno recordar porque la historia no empieza en 1945. En mayo de 1919 remitió al Congreso un proyecto de ley que otorgaba pleno reconocimiento a la acción sindical y establecía la organización y funcionamiento de las asociaciones profesionales. En sus fundamentos, Yrigoyen expresaba: "Ha llegado el momento de incorporar a la legislación general una ley de organización gremial: lo exige así el desarrollo adquirido por el país en sus múltiples actividades...", para luego agregar que toda la legislación laboral vigente no sería eficaz sin la existencia previa de una ley básica que reconociera la acción de las organizaciones sindicales. Lo cierto es que esta iniciativa no se cristalizó, y por más de medio siglo el Estado fijó los límites del sindicato pero no marcó la orientación básica.

Un lapso mayor que el de la década infame, con posterioridad a Yrigoyen, se necesitó para que Perón, en su primer acto ministerial, derogase la legislación represiva vigente sobre asociaciones profesionales, dictada por el propio gobierno al que pertenecía, y sancionase el 2 de abril de 1945 el decreto sobre reglamentación de las asociaciones profesionales, dando inicio a una experiencia político-sindical que cambia el esquema de relación existente hasta el momento.

Es a partir de este hecho que en la Argentina se altera sustancialmente la relación Estado-sindicato, entre otras razones porque también el Estado se altera sustancialmente, cualitativamente, dejando de ser el sindicato un elemento de la sociedad civil para convertirse —permítaseme la expresión— en poco menos que una parte del Estado. Es decir, a la inversa de los hechos que se dieron en la Argentina, el radicalismo interpretó que la relación sindicato-clase debía primar y no estar condicionada por la relación sindicato-Estado. La consecuencia de ello es que el mensaje tradicional, esperanzado pero moroso, es sustituido por una relación de eficiencia hasta entonces no vista por los trabajadores.

En 1945 se inicia una etapa en la cual los trabajadores toman conciencia de su gravitación política y nace un movimiento en el que coexisten tendencias históricas democráticas y revolucionarias, por un lado, con un fuerte componente corporativo, por otro. Producto de este período es el decreto 23.852, de 1945, ratificado luego por la ley 12.921.

En 1955, tras el derrocamiento del general Perón, se deroga la ley de asociaciones profesionales, se intervienen los sindicatos y la actividad gremial es nuevamente cercenada. Pero ya en la Argentina las organizaciones sindicales ocupaban el escenario social y político de una manera insustituible para el sistema democrático, por lo que la conculcación de su actividad partirá en lo sucesivo de modo exclusivo de los gobiernos autocráticos.

Llevada de la mano y con la inspiración de Crisólogo Larralde —aquel que saludó a la clase trabajadora señalándola como la única clase, y de la que vaticinó: "Esa única clase está marchando y si no se demora en tratos venales y en la faena mercantil de su propio destino, llegará al campo abierto de la vida en libertad, con derechos totales, con seguridad y fuerza para afirmar el bienestar humano..." "Entonces todos seremos obreros de alguna obra..."—, la Unión Cívica Radical fue protagonista principal en la formulación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se ratifica el ya consagrado derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, y garantizando los derechos de la asociación gremial —el de huelga entre ellos— y de los representantes gremiales.

Es en 1958 cuando mediante la ley 14.455 se normaliza la actividad sindical. Queremos señalar que, consecuente con lo acontecido en todos los ámbitos de la República, el sindicalismo vivió durante el gobierno radical del presidente Arturo Illia uno de los momentos de mayor respeto en el libre ejercicio de sus facultades y autonomías.

La nueva dirigencia sindical que accedía entonces a la conducción de las asociaciones gremiales, y que todavía estaba vinculada a aquella vieja concepción del sindicato-Estado, confundió su rol protagónico en el sistema y, en su deformación, desarrolló la errónea tesis del participacionismo, que muchos sostuvieron durante el "onganiato". También es justo reconocer que hubo muchos otros que jamás lo admitieron. En la Argentina existió alguna vez una CGT de los Argentinos y una CGT de Azopardo.

En 1973 el gobierno peronista dicta la ley 20.515, expresión legislativa que fue cuestionada por el Ateneo de los 32 Gremios Democráticos y por la Juventud Trabajadora Peronista. Es durante un gobierno constitucional que se plasma la normativa que consagra la más amplia acción sindical, que se verá nuevamente conculcada por la ley 22.105, una de las expresiones más virulentas contra la vida de las organizaciones de los trabajadores.

Debemos rendir aquí tributo y homenaje a todos aquellos trabajadores anónimos que, como los dirigentes, fueron perseguidos por la dictadura y pagaron hasta con su vida el hecho de brindar su militancia a la causa de los trabajadores y de sus organizaciones. Hoy no podrán participar ni gozar de los beneficios de la nueva legislación, pero son sus verdaderos autores, porque no debe ser en vano su tributo y porque sus sacrificios nos han hecho comprender que sólo la democracia garantiza la vida y los derechos de los trabajadores.

Ya desde antes de acceder al gobierno y mediante su proyecto democrático el presidente Alfonsín tuvo una clara definición de cuál debía ser el rol del sindicato en el sostenimiento del sistema. Decía: "no hay democracia posible sin sindicatos fuertes, representativos y democráticos en su funcionamiento y constitución".

En su primer mensaje a la asamblea legislativa, el 10 de diciembre de 1983, dijo nuestro presidente: "Debemos ayudar a nacer al nuevo sindicato, que tendrá poderío material y económico, pero deberá tener, fundamentalmente, contenido humano. El nuevo sindicato debe organizarse de abajo hacia arriba, afirmando sus raíces en las bases y en el interior de la República. Será un sindicato cuyos orígenes surgirán como expresión genuina de las bases, sin las deformaciones que históricamente ha producido la intromisión del Estado, de los partidos políticos o de los empresarios; cuyos procesos electorales serán controlados por el Poder Judicial, que garantizará su corrección; ampliamente participativo, con expresión adecuada de las minorías y en el que no se admita ninguna actitud discriminatoria de carácter político, racial o religioso".

Así, a pocos días de iniciado nuestro gobierno —aunque hoy podemos decir que a los cuatro años recién logramos consenso—, el Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley de reordenamiento sindical. Por primera vez en la historia la televisión transmitió en directo parte de un rico debate parlamentario donde se fijaron las distintas posiciones sobre el tema, el cual dejó de ser una cuestión que pocos conocían. Aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto fue rechazado por diferencia de un voto en la Cámara alta.

El gobierno, de todos modos, siguió considerando impostergable sancionar una norma que permitiera la realización de elecciones libres en los sindicatos.

En julio de 1984 se aprobó el régimen para normalizar los sindicatos. Una gestión de total prescindencia por parte del Estado en el pro-

ceso electoral, la limpieza más absoluta en el desarrollo de comicios —aquí recuerdo la expresión de un señor diputado quien días pasados dijo que allí se votó en una urna y los votos se contaron en otra urna—, la opción inédita del control judicial y el cumplimiento estricto de cada palabra empeñada garantizaron, bajo la dirección del ministro Casella, que en los meses sucesivos cientos de miles de trabajadores eligieran sus conducciones con un alto grado de participación, demostrado en la variedad de las listas y en su carácter ampliamente pluralista en muchos casos. Casella, es justo reconocerlo, realizó una encomiable gestión, que lo caracterizó como confiable y eficaz para la clase trabajadora.

Quedaba así abierto el camino para la normalización de la CGT, y el gobierno vuelve a impulsar con las más amplias garantías esta normalización. Solicita la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, que envía una misión técnica encabezada por el jurista griego Nicolás Balticos, quien posibilitó fijar la fecha del 7 de noviembre de 1986 para la regularización de la CGT.

Este ha sido sin lugar a dudas un paso trascendente en la vida institucional de las organizaciones sindicales, que desde 1975 no contaban con una conducción central que las representara. Para llegar a este logro se debió transitar un complicado camino, pero quiero resaltar que desde la llegada del gobierno democrático fueron normalizados alrededor de 1.300 sindicatos en todo el país y que finalmente se normalizó la CGT, a la que se le devolvieron los bienes que le pertenecían.

Debemos destacar que jamás hubo en los últimos años un proceso de normalización sindical de estas características —esto lo reivindicamos para la gestión de este gobierno democrático—, que ha incidido positivamente en la vida de las asociaciones sindicales y que ha sido un ejemplo de compromiso democrático asumido por un gobierno popular para con los trabajadores argentinos.

Ese compromiso se ha expresado en otras disposiciones, como la derogación de la ley 21.307 y la restitución de la vigencia de la ley 14.250, lo que hoy nos permite tener muchas comisiones paritarias funcionando.

Se aprobó el Convenio 154 de la OIT, por el cual por primera vez llevamos al ámbito de la administración pública la negociación colectiva.

También restituimos la vigencia de la ley 16.459, de salario vital, mínimo y móvil, obra del gobierno del presidente Illia, y hoy tenemos constituido y funcionando el consejo nacional.

Todo esto, sin señalar muchas otras iniciativas legislativas referidas al campo laboral aprobadas durante estos años en este Parlamento, muestra que el proyecto democrático del presidente Alfonsín ha avanzado en forma concluyente en el mundo del trabajo, con el expreso reconocimiento internacional que oportunamente, en la 73ª Conferencia de la OIT, realizarán tanto Francis Blanchard, su director general, como el titular del bloque obrero, el señor Gerald Muhur.

Era indispensable recordar, aun dejando muchas cosas en el tintero, todas estas alternativas que vivieron las organizaciones a través de la legislación que reguló su funcionamiento, porque hoy vamos a sancionar una nueva ley que, acotada en su contexto histórico, y como bien lo ha dicho el presidente de nuestra comisión, es lo mejor que hemos podido alcanzar. Se ha arribado a este proyecto por consenso, mediante un acuerdo en el que todas las partes cedieron y donde nadie regaló nada. Cada uno llevó sus ideas con la lógica pretensión de concretarlas.

Todo ello se realizó en la inteligencia de que lo posible no era lo mejor ni era tal vez lo ideal.

Este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas legales conocido como paquete de leyes laborales, del cual ya hemos aprobado la correspondiente a las negociaciones colectivas. Hoy estamos considerando el proyecto de asociaciones profesionales. Esperamos que pronto el Senado trate los otros dos proyectos que forman parte del acuerdo que dio lugar al paquete laboral, que son el del Seguro Nacional de Salud y el de obras sociales.

Sin ninguna duda, esta ley que sancionaremos será perfectible. Pero quiero decir sinceramente que a pesar de que quizá no sea tan buena, estoy convencido de que los trabajadores, a través de su vivencia cotidiana, la pueden hacer muy buena. Podrán hacerlo si las bases no dejan de participar ni permiten que se anule su participación; si los dirigentes comprometidos con el sistema democrático hacen de la participación uno de los objetivos de su acción, comprendiendo en su compromiso democrático que cuanto más ancho sea el espectro de los sectores involucrados en una real participación, más fuerte va a ser el asentimiento sobre el cual reposará el mecanismo democrático en la Argentina.

La pueden hacer muy buena porque no estamos con esta ley recortando el funcionamiento institucional de la organización sindical. Pensamos que las instituciones son aquello que los hombres que a su turno las conducen son capaces de hacer; a esta acción le adjudicamos los excesos y deformaciones de la acción institucio-

nal, porque nuestra propuesta es lograr el perfeccionamiento de los sindicatos, pero nunca cercenar el funcionamiento institucional.

La pueden hacer muy buena si son capaces de dar a las organizaciones sindicales una actividad que atienda a las requisitorias de la sociedad en su conjunto, extendiendo la solidaridad y la fraternidad —que son el alma de la praxis sindical— al todo social.

La pueden hacer muy buena si no abandonan los trabajadores, que constituyen el sector mayoritario de la sociedad, su incesante búsqueda de mayor libertad y justicia social y del goce de los beneficios del bienestar material.

La pueden hacer muy buena si hacen del sindicato el hogar común de todos los trabajadores, sin discriminaciones políticas ni de ningún otro orden.

Y será aun más buena, usando una expresión que utilizara el presidente Alfonsín, el día que se logre que, encontrándose dos trabajadores al entrar en el sindicato, uno le diga al otro: "Entrás al sindicato y por eso eres mi hermano. No me importa tu color político; no me interesa. Me interesa saber que tenemos los mismos problemas, las mismas angustias, los mismos objetivos".

En la convicción de que este espíritu anida en el corazón de los trabajadores argentinos y que fructificará, daremos nuestro voto favorable a esta iniciativa consensuada. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Clérico. — Señor presidente: tengo la sensación de que esta Cámara es realmente el espejo de lo que piensa nuestro pueblo. Una hora atrás este recinto se hallaba repleto de diputados porque se estaba discutiendo una tema que interesa a la gente, que no está resuelto y que necesita una solución. En cambio, ahora estamos hablando de una cuestión que en este momento no interesa al pueblo, que se encuentra gastada y que ya hace dos años que está siendo considerada por este Parlamento.

Creo que estamos viviendo una circunstancia en el proceso de elaboración de las leyes a la que quizá no le hemos prestado debida atención. En 1986 el Senado sancionó un proyecto de ley de asociaciones sindicales. A mediados del año pasado, como fruto de un acuerdo entre el radicalismo, el justicialismo y la Confederación General del Trabajo, esta Cámara se vio compelida a tratar y aprobar en pocas horas un proyecto de ley que dejó de lado la sanción del Senado, pues estaba originado en el Poder Ejecutivo. Esta sanción se remitió raudamente a la Cámara de Senadores, la que nueve meses des-

pués también la dejó de lado, y hoy estamos considerando una iniciativa cuyas únicas diferencias de cierta importancia con el texto que nosotros habíamos votado se refieren a las medidas de acción directa y a la cantidad de delegados en relación al número de trabajadores. Tanto es así que algunos senadores, que son conocidos constitucionalistas, expresaron sus serias dudas respecto de si se estaban siguiendo los preceptos constitucionales en el trámite de esta norma.

Si en la reunión de esta mañana de la Comisión de Legislación del Trabajo yo hubiera firmado también el dictamen, éste habría sido unánime y no habríamos vuelto a discutir este gastado asunto. Sin embargo, me pareció que era mi deber no avalar ese despacho porque creo que es necesario puntualizar que aquí no estamos discutiendo acerca de la defensa de las organizaciones sindicales.

Entiendo que no puede haber un solo diputado o habitante de la Nación que pueda cuestionar la necesidad de la existencia de fuertes organizaciones sindicales para defender los intereses de los trabajadores. En el mundo libre existen muchos ejemplos de países en los que hay fortísimas organizaciones sindicales defendiendo esos intereses. En ese sentido, pienso que la Argentina debe estar entre las naciones que cuentan con este tipo de organizaciones, con su fuerza y su respaldo.

Evidentemente, ésa no es la cuestión, a pesar de que ha sido mencionada en reiteradas oportunidades por los representantes de los bloques justicialista y radical. Aquí la cuestión es si finalmente este Parlamento va a decidir vivir o no en función de la letra y el espíritu de nuestra Carta Magna y de los convenios internacionales aprobados por este propio Poder Legislativo.

Señor presidente: quiero dejar expresa constancia de que al sancionar este proyecto la Cámara de Diputados y el Senado están violando el espíritu y la letra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los convenios 87 y 54 de la Organización Internacional del Trabajo, porque en todos los casos y con justeza se declara que debe regir la libertad en materia sindical, pero nosotros estamos a punto de sancionar definitivamente un proyecto de ley que nuevamente consagra el monopolio sindical en la República Argentina. Esto debe ser comprendido en todos los órdenes porque si no tendrá razón nuestro pueblo cuando dice que le merecen poco respeto los dirigentes políticos, sindicales y empresarios, porque en cada oportunidad en que discutimos estos temas parece ser que

debemos respetar la "quintita" de alguien o tratar de que alguien no se sienta molesto en los privilegios que posee, en lugar de reconocer este credo de la libertad que ha hecho posible el progreso de tantos países del mundo y que será el único que permitirá que nuestro país también lo logre.

Este país es dependiente por sus contradicciones internas y no por las externas, porque no se anima a emprender resueltamente el camino de la libertad y porque proclamamos la democracia pero la negamos en muchos de los hechos concretos que todos los días debemos discutir y definir. Es éste un país que está enfrentado con problemas como los que se consideraron al comienzo de la sesión y donde estamos pasando a un lugar subalterno el problema de la educación.

Sr. Cardozo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Presidente (Duhalde). — Señor diputado Clérico: ¿concede la interrupción que le solicita el señor diputado Cardozo?

Sr. Clérico. — Señor presidente: sé que el señor diputado Cardozo me solicita una interrupción, pero le pido que comprenda que estoy finalizando mi exposición, por lo que tendrá oportunidad de responder a mis expresiones.

Debido a los graves problemas que padecemos, debemos recurrir permanentemente a la responsabilidad del pueblo argentino; por lo tanto, en cada oportunidad que se presenta tendríamos que decirle que está en condiciones de participar. Pero con un proyecto como el que aquí vamos a votar no creo que demos posibilidad de participación a los núcleos de trabajadores que pudieran estar en desacuerdo con aquellos que en un determinado momento adquirieron el monopolio de la dirección sindical. Por supuesto, pienso que con esta norma no les estamos dando participación e inclusive les estamos negando el derecho a la libertad. Yo le diría al señor diputado Borda que es éste el significado profundo del liberalismo, que pretende ver a todo el pueblo de pie y con la frente alta; que en cada oportunidad esté en condiciones de decidir y que no se creen cotos de caza mediante las leyes que el Parlamento sanciona.

Por lo expuesto, hoy no he firmado el dictamen de la comisión, aunque en ese momento pensaba con franqueza que lo que íbamos a discutir eran sólo las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Esta situación nos retrotrae al comienzo de la discusión de este proyecto. Por ese motivo soli-

cito que sólo acordemos aquello que auténticamente nos permita transitar en libertad. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. González (E. A.). — Señor presidente: deseo fundamentar el voto favorable del bloque demócrata cristiano al proyecto de ley en consideración, sin extenderme demasiado porque en oportunidad en que la Cámara debatiera esta iniciativa el integrante de mi partido que en ese momento ocupaba una banca —el ex diputado Angel Bruno— hizo una clara exposición doctrinaria y política de la postura de la democracia cristiana.

Voy a recordar aquí algunos de los fundamentos que nos llevan a apoyar este proyecto, a pesar de que consideramos que no satisface plenamente nuestras aspiraciones y que aún hay mucho por hacer en esta materia. De todos modos, daremos nuestro voto afirmativo porque, no obstante algunas expresiones que aquí se han vertido, la iniciativa que consideramos asegura la libertad, la solidaridad y la participación, que son los principios fundamentales que la democracia cristiana entiende que deban estar presentes en el ordenamiento sindical.

No sería coherente con la posición de mi partido si dejara de referirme a las disidencias que en su momento planteó el señor diputado Bruno y que hoy tengo que señalar no para oponerme, sino porque a pesar de ellas votaremos afirmativamente el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo. Me refiero al tema de la representación de las minorías en los cuerpos de conducción de las asociaciones sindicales. Esta es una larga y vieja aspiración de la democracia cristiana y fundamentalmente de su movimiento de trabajadores, que hoy no está plenamente asegurada en este proyecto. Pero a pesar de ello, repito, no haremos objeciones y lo votaremos afirmativamente.

Lo haremos así porque entendemos que existe urgencia en la sanción de este proyecto de ley. Es un baldón para los trabajadores y una mancha para nuestra sociedad que las asociaciones sindicales de trabajadores todavía estén regidas por las normas de la dictadura. De una vez por todas nuestra sociedad debe sacarse de encima los últimos resabios de esa triste etapa que vivió nuestro país, que aún nos duelen y golpean. Por ello, creemos que es urgente la aprobación de esta iniciativa.

Nos agrada el método utilizado, porque no recurre a la imposición. Todos los sectores debieron ceder; aquí hubo acuerdo. Hubo algo

que quizás a algunos no les guste, pero que es legítimo: la negociación. Es decir que existió negociación, y en virtud de ella los diferentes sectores cedieron algo para lograr un acuerdo. Esta es la base de la democracia pluralista que se va consolidando con estos procedimientos.

Estamos demostrando que nuestra democracia tiene un gran futuro por delante, porque ya nadie se siente dueño absoluto de la verdad; todos saben que deben compatibilizar sus ideas e intereses con las ideas e intereses de quienes están enfrente.

Por otro lado, coincido con las expresiones del señor miembro informante de la comisión en el sentido de que este proyecto de ley no es la meta de los trabajadores sino sólo el principio. Los demócratas cristianos muchas veces hemos señalado que aspiramos a otro tipo de sociedad, a otra forma de participación de los trabajadores en el proceso productivo. Ansiamos ver una sociedad en la que la cogestión, la copropiedad, la autogestión y las empresas de propiedad de los trabajadores sean lo habitual, es decir, la forma normal de producir en el país.

Muchas veces se nos ha dicho que eso es una utopía, pero los pueblos que no sueñan con una utopía carecen de esperanza para desarrollar su historia. Nosotros no nos quedamos sentados esperando que se cumpla la utopía; mientras luchamos por ella, vamos colocando los ladrillos para construir ese camino. Entonces, la aprobación de este proyecto de ley es un nuevo paso en ese camino que nos conducirá a la utopía con la que soñamos.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pepe. — Señor presidente: confieso que esta bancada está azorada. Casi resistiéndonos a creerlo, escuchábamos al señor representante del conservadorismo argentino hacer alusión a las viejas épocas del privilegio en la República. Percibo que no hay consecuencia, y voy a traer a la memoria que en 1984, cuando el oficialismo trajo a este seno el proyecto de ley de reordenamiento sindical y nosotros planteamos nuestra posición al respecto, el señor diputado Alsogaray acompañó entre el aplauso de los que circundaban el recinto y de nuestro propio bloque aquella posición que el peronismo había tenido en la materia.

Hoy, el señor diputado Clérici, que hizo mutis por el foro en el seno de la comisión específica, acaba de decir que ahora las épocas en que sólo tenían derecho los patrones en esta República. En el fondo de su planteo se refleja una actitud reivindicativa de los viejos privilegios

Podrán ahora hablar de la generación del 80, sobre lo que nos han bombardeado en los últimos tiempos; una generación que según el conservadorismo hizo el país; generación que para el resto de la ciudadanía constituyó un grupo minúsculo del privilegio que detentaba el poder para servir sus propios intereses de carácter sectorial.

Podrán hablar —como se ha hecho, y convenía que lo rescatara el conservadorismo— del fraude patriótico en la República, de la década infame...

Sr. Clérici. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Pepe. — No, señor diputado.

Podremos hacer un debate global; pero venir a decir que es un privilegio que después de cuatro largos años los trabajadores se reencuentren parcialmente con un contexto legal es un agravio que nosotros rechazamos con toda nuestra fuerza, porque no se condice con este proceso evolutivo que los liberales plantean al resto de la sociedad argentina.

Parece que todo sirve: privaticemos, rematemos, entreguemos este Estado que no sirve. Pero hay objeciones cuando los trabajadores, después de mucho esfuerzo y penar, consiguen acceder a una norma legal. El peronismo rechaza este temperamento porque no está dentro de este nuevo contexto de la sociedad política argentina.

El señor diputado hacía referencia recién a nuestra discusión anterior. Estamos fracasando los dirigentes políticos. Se habla del doble discurso, pero aquí nadie puede escapar a él, y mucho menos los conservadores. Ellos deben acompañarnos en este proceso de reencuentro de los trabajadores con sus mejores épocas. No legislemos solamente para los patrones. Seguramente no habría discusión si estuviéramos tratando algún tipo de exención impositiva para la Unión Industrial Argentina o para la Confederación General Económica. Ahí nos acompañarían con su voto. Pero como todo esto tiene un contenido obrero, como está encaminado a rescatar al sector más empobrecido de la sociedad, entonces hay objeciones.

Me hubiera gustado escuchar al señor diputado en el seno de la comisión, pero nada dijo; esperó este ámbito para hacerlo. Entonces, ahora le decimos lo que hubiera escuchado en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo. (Aplausos.)

Sr. Clérici. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Clérici. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque el señor diputado Pepe no me ha escuchado bien o no está adecuadamente informado respecto de dos temas.

En cuanto al primero, por el que me asigna una determinada ideología, voy a hacerle llegar las bases doctrinarias de la Unión del Centro Democrático, en donde proclamamos la ideología liberal. No entiendo por qué modifica por su cuenta nuestra postura ideológica.

En segundo lugar, puse particular énfasis al comienzo de mis palabras, cuando dije que entendía que aquí no estaba en discusión la defensa de las organizaciones sindicales. Lo reitero: eso está fuera de toda discusión. Pero ahora el señor diputado Pepe me asigna un ataque a la representación sindical de los trabajadores.

Afortunadamente, quienes integramos este bloque no estamos ocupando una banca para defender ningún pasado en particular, sino para garantizar un presente y también un futuro. Si en la reunión de la comisión no planteé el argumento que he expresado en el recinto fue porque entendí que se iban a discutir las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto originario y no un nuevo proyecto emanado de la Cámara alta.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. — Señor presidente: debo decir, en primer lugar, que el proyecto de ley en consideración no sólo interesa al pueblo de la República, sino también a esa otra olvidada que es la Nación Argentina, porque organiza un sector social vital para el país que es la clase trabajadora.

Si ahora hay menos diputados en el recinto que cuando se trató la moción formulada por el señor diputado Ruckauf es porque lamentablemente en ese momento no había consenso. En cambio, por suerte ese consenso se ha dado con respecto al tema que nos ocupa, y es importante resaltar este acuerdo porque es producto del diálogo, que es el único modo que tenemos para salir de la crisis a la que nos ha arrojado la barbarie.

Mañana se cumple un nuevo aniversario de nuestra última entrada como Nación en una época de barbarie, y como señalaba hace unos instantes un señor diputado hemos demorado más de cuatro años para rehacer un instrumento legal que garantice el funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores. Todavía queda

por reformular también la ley de contrato de trabajo, que esa misma barbarie arrebató a los trabajadores.

Traigo estos recuerdos al recinto para que se advierta lo que cuesta, además de las vidas perdidas —que ya representan un costo inaceptable—, la quiebra del orden institucional, y para que seamos conscientes, minuto a minuto, de lo que debemos hacer hoy más que nunca en medio de la terrible crisis económica que asuela al país, cuando se inquiere para qué sirve la democracia.

La democracia sirve para sancionar este tipo de normas para los que trabajan en este país. Esta es la democracia que debemos defender, porque de ella parten las posibilidades de futuro. Fuera del diálogo y de la convivencia no hay futuro para ningún sector nacional sino sólo derramamiento de sangre argentina y entrega de nuestro patrimonio. Esto lo enseñó con sangre y fuego el proceso iniciado un 24 de marzo, que avasalló a nuestro país arrollando a su paso a todas las organizaciones populares y sociales.

El objetivo de este proyecto de ley que nos ocupa es de reparación, que nace del consenso y que nace en la democracia. Por eso el socialismo lo apoya. Es perfectible, como lo han dicho varios señores diputados. Quizás a ninguno nos conforme plenamente. Pero sin duda es un indicio importante —como decía otro señor diputado— de la madurez que vamos alcanzando. Lo hacemos con errores y disidencias, pero también con la esperanza de seguir acordando y avanzando.

Los socialistas hemos aportado antecedentes en la materia mediante el proyecto Justo-Palacios presentado en 1912 en esta misma Cámara, mediante el debate que tuvo lugar en el Senado en 1926 con la participación de Bravo, y con el proyecto de 1940, en el que interviene Palacios en el Senado. Siempre hemos sido partidarios constantes de la organización de los trabajadores.

Dijo Palacios: "Se trata de reconocer y fomentar las asociaciones de los trabajadores porque así conviene al interés social". Y agregó: "Las asociaciones de trabajadores contribuyen poderosamente al desarrollo de nuestro organismo social y no hemos de tratarlas como enemigas, sino como factores del engrandecimiento de la patria."

Tenemos nuestras propias concepciones y por ello es que hubiésemos querido que en este proyecto se cristalizaran otros objetivos. En esta iniciativa no queda expresado con suficiente claridad el carácter de la unidad confederativa de los trabajadores. Este principio se vincula

con el interés nacional, que es superior al propio interés de los trabajadores.

Los países dependientes, que luchan permanentemente contra los factores que tratan de desintegrarlos, tienen en la unidad del movimiento de los trabajadores una de las bases de la unidad nacional, que es algo que debemos defender por encima de todas las cosas. Por eso es que hubiéramos querido ver expresada con toda claridad en el texto de este proyecto la unicidad de la confederación de los trabajadores.

Con respecto a la organización confederal, Juan B. Justo dijo: "La conciencia da un gran paso cuando vincula prácticamente entre sí a los sindicatos obreros de diferentes oficios o ramas".

Nosotros hubiéramos querido una organización federativa de los sindicatos para ayudar al desarrollo de las federaciones en cada provincia, articulando el regionalismo y la representatividad en su organización.

También hubiésemos querido avanzar aún más en la defensa de la representación de las minorías. De todas formas, esta iniciativa significa un concreto avance en esta materia con respecto al pasado.

Hubiésemos querido consagrar una clara proporcionalidad en los cuerpos deliberativos. Sin embargo, no podemos olvidar que estamos en un país que avanza. Hasta hace pocos años las mayorías rechazaban el sistema de la proporcionalidad para integrar esta misma Cámara y se definían por el sistema de los dos tercios, establecido en la ley Sáenz Peña. Ese cambio fue fruto de un largo proceso de lucha, de maduración y concientización. Esta ley hará que se siga avanzando en la organización del movimiento obrero y de esa forma llegaremos a lograr una composición proporcional en los cuerpos deliberativos. Esta es nuestra aspiración.

Con relación a los cuerpos deliberativos, hubiéramos querido asegurar la mitad más uno de los cargos para la mayoría y una representación proporcional para las minorías.

Creemos que hay otro problema espinoso y es el que se vincula con las facultades de los cuerpos de delegados. La solución de este tema demandará un largo proceso, pero algún día deberemos llegar a la conclusión de que para asegurar el funcionamiento orgánico y vivo del movimiento obrero no hay decreto, ley u ordenanza que reemplace el valor de la militancia en las bases. Cuando la practiquemos podremos dar mayor libertad, poder de decisión y facultades a los cuerpos de delegados, que con el tiempo deben constituirse en la base de la pirámide de la organización del movimiento obrero.

Queremos dar importantes facultades a estos cuerpos de delegados, sobre todo en el seno de las empresas líderes, no para que detenten su propiedad sino para que vigilen aspectos tales como el control de costos, de precios y de calidad, la vigencia de las leyes laborales, de higiene y de seguridad y prevengan la especulación.

En grandes países, que se llaman occidentales y que no han expropiado a nadie, los trabajadores participan porque las sociedades se han dado cuenta de que esa participación en la administración de las grandes empresas garantiza el cumplimiento de las leyes por parte de esas organizaciones.

Expresamos así nuestros anhelos, sin dejar de reconocer que este proyecto es un gran avance. Por eso votaremos favorablemente la iniciativa, que ha sido suficientemente tratada en este Honorable Congreso y que lleva una respuesta concreta a todos los trabajadores de nuestro país.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Manrique. — Señor presidente: en primer lugar deseo adelantar el voto favorable de la bancada del Partido Intransigente a la iniciativa en tratamiento.

En esta instancia nos congratula empezar a pagar una deuda que el Parlamento argentino tiene con el movimiento obrero, rindiéndole un homenaje merecido en este día que, como dijo el señor diputado Estévez Boero, se trata de la víspera de la conmemoración de uno de los hechos más terribles de la historia argentina.

Digo esto porque el régimen militar anterior se ensañó particularmente con el movimiento obrero argentino. No podemos olvidar que apenas a los tres meses de instalado en el poder, aquel gobierno comenzó a imponer el terror en la sociedad y dictó las leyes más antiobreras que se hayan conocido: la 21.297, de modificación de la ley de contrato de trabajo, que hizo dar marcha atrás a la historia de las conquistas laborales individuales de este país; la ley 21.400, de suspensión del derecho de huelga; la ley 21.476, de modificación de los convenios colectivos, que fueron adecuados a la ley de contrato de trabajo, y la ley de prescindibilidad para el empleado público. Se trata de una maraña de leyes que, junto con la que modificó el procedimiento para la fijación del salario mínimo vital y móvil, tenían puesta su mira principal en la desarticulación del movimiento obrero argentino.

La dictadura militar sabía que el movimiento obrero argentino era el único que razonable-

mente podía oponerse a todo lo que conocimos con posterioridad. Me refiero al proyecto terrible y macabro de Martínez de Hoz, que se asentó básicamente en dos pilares: la subsidiariedad del Estado y la apertura de la economía. Estas eran las palabras que utilizaba Martínez de Hoz. De la mano de algunos proyectos modernizadores o de la mano de algunos pensamientos que han vertido algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, también surgen iniciativas que pretenden denostar la unidad sindical, que es uno de los mayores logros que ha conseguido la lucha obrera en la Argentina.

Ha dicho muy bien el señor diputado Estévez Boero que en la Argentina lo único que puede haber es unidad sindical. Mediante la ley 22.105 Martínez de Hoz intentó fragmentarla, otorgándoles un exceso de atribuciones a las asociaciones simplemente inscritas. No otorgó una sola personería gremial en aquellos casos en que la diferencia entre las asociaciones simplemente inscritas y las que tenían personería gremial era prácticamente tenue. Es decir que pretendió instaurar lo que se conoce como pluralismo sindical. También la mal llamada Revolución Libertadora dictó el decreto 9.270, por el que pretendió consagrar la pluralidad sindical. Y para saber qué fue lo que pasó hay que leer la historia y comprenderla: por más decretos, por más leyes y por más terror con los cuales se pretendió someter al pueblo obrero, su unidad y concepción fue lo que se privilegió por encima de cualquier trampa y mecanismo artificioso que pudieran crear quienes en su momento detentaron el poder.

Este proyecto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y tenemos que saldar esta deuda. Los que alguna vez caminamos de la mano de compañeros gremialistas sabemos cuánto nos ha costado durante todo este tiempo resolver los problemas derivados de la autoridad de aplicación, las elecciones hechas según uno u otro estatuto, las personerías gremiales que no se otorgan y demás circunstancias por el estilo. Es imprescindible que esta deuda se cancele hoy mismo, porque es justo rendir un homenaje al movimiento obrero, que es el sector primordialmente castigado a raíz de lo que ocurrió.

Quiero hacer referencia al artículo 3º, que —como bien dijo el señor diputado Borda— no sólo menciona los intereses profesionales sino también las condiciones de vida y de trabajo. Es necesario respetar estos derechos y que el movimiento obrero los ejerza.

Desde el comité Capital de mi partido se le reclamó en algún momento al movimiento obre-

ro su opinión sobre lo que ocurría en el Congreso Pedagógico y sobre qué educación querían para sus congéneres y descendientes. En esto es imprescindible que exista participación.

A su vez, este es un proyecto que asegura la democracia interna; no cabe ninguna duda sobre ello.

Hemos hablado de lo que es la unidad sindical. Sostener la pluralidad sindical en este país sería pensar que estamos en Estados Unidos o en alguno de los países centrales, y en el sindicalismo amarillo, es decir, en cosas en las que es imposible pensar sanamente desde acá si es que queremos un movimiento obrero consustanciado con la unidad nacional, como bien se dijo con anterioridad.

La democracia interna está aquí garantizada, y para eso no sólo se tiene el acto formal de las elecciones sino la representación permanente a través del cuerpo de delegados y de las comisiones internas. Del comité participan los afiliados, y de la actividad en general la totalidad de los obreros.

Este proyecto aparece en un momento muy particular, no sólo porque pasaron cuatro años desde que debió convertirse en ley sino también porque en la actualidad el movimiento obrero exhibe una disminución de 170 mil afiliados. Hay 170 mil obreros industriales menos en el país y se ha extendido abruptamente el cuentapropismo y el trabajo de menores en lugares donde la captación de la organización sindical no puede llegar. Habrá que hacer esfuerzos de imaginación realmente grandes para poder llegar a organizar estos sectores.

Por ello, como bien se ha dicho aquí con anterioridad, no sólo son importantes la democracia interna y la unidad sindical sino que también hay que empezar a imaginar cómo hacer efectivos otros principios que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como ser la gestión directa de los trabajadores. Debemos tener en cuenta que en este momento está en la picota, en el centro del debate nacional, el tema de las privatizaciones. No veo por qué no podemos empezar a creer que nuestros trabajadores pueden ser los mejores hacedores de lo que es de todos. Con esto si empezáramos a dar un ejemplo a muchos países del mundo que quizás utópicamente creyeron en esto que nosotros necesitamos todavía efectivizar.

Por lo expuesto, apoyamos este proyecto; por la aludida deuda y por el homenaje merecido, y porque de una vez por todas tenemos que dejar de ver solamente las minucias, las pequeñas cosas, para pasar a cumplir con el rol que la sociedad nos ha asignado al ubicarnos en es-

tas bancas. No vamos a hacer más si tiramos para el costado lo que se ha venido elaborando. Más allá del consenso que se pueda haber logrado, éste es el mejor homenaje que podemos rendir al sector que a nuestro criterio fue el más golpeado por la dictadura militar. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zaffore. — Señor presidente: deseo anticipar mi voto favorable a este proyecto que reproduce en su esencia el que tratamos el año pasado, lo cual me exime de entrar demasiado en los detalles de su redacción. Debo sí expresar que me parece positivo que se hayan aproximado los puntos de vista de los sectores obrero y empresarial, en especial en algunos artículos del proyecto que eran objetados en orden a que, sin favorecer demasiado a las organizaciones sindicales, iban a constituirse en un obstáculo para el proceso de inversión.

Según mi criterio, quizá debió haberse avanzado un poco más en el sentido de despejar estas dudas respecto de la legislación laboral en aras de favorecer el proceso de inversión, pero de todos modos considero aceptable la aproximación que se ha logrado y dejo a la experiencia derivada de la aplicación de la ley la palabra definitiva.

Quiero hacer una brevisima precisión histórica respecto de la mención a la ley 14.455 hecha por el señor diputado radical que habló como miembro informante; aludió a esa normativa para referirse luego a la acción del anterior gobierno radical. Al respecto, recuerdo que la ley 14.455 —antecedente del proyecto que tratamos— fue sancionada el 8 de agosto de 1958 durante el gobierno desarrollista. Celebro el revisionismo de la Unión Cívica Radical, porque en aquel entonces acusó a la ley falsamente de fascista y de totalitaria, oponiéndose a su sanción. Al mencionar esta fecha, destaco también que sólo habían transcurrido tres meses de la asunción del gobierno por el desarrollismo cuando se sancionó la ley de asociaciones profesionales. Esto indica, por un lado, el ritmo con que se trabajaba en esa época; por otro lado, señala que Frigerio —quien tuvo a su cargo el acuerdo con los dirigentes sindicales— logró simultáneamente acuerdos fundamentales para el proceso de inversión y desarrollo. Ya estaba en marcha entonces la política petrolera, así como un conjunto de medidas que permitirían que esta ley no fuera letra muerta, ya que existían condiciones de expansión y pleno empleo en la Argentina. De todos modos es válido el antecedente, y en él se basa nuestro apoyo a esta nor-

mativa que por cierto es sustancialmente diferente del proyecto Mucci, ya mencionado en esta sesión.

Nuestro apoyo a los principios generales en que se inspira este proyecto —especialmente en lo que se refiere a la unidad sindical— reside en que, a diferencia de lo expresado por el representante del liberalismo, nosotros pensamos que la Argentina necesita dar amplia libertad a la iniciativa privada y a la expansión de las fuerzas productivas; pero de ninguna manera es aceptable un concepto del contrato de trabajo tal como se lo concebía en el siglo pasado. Es decir que no hay libertad de las partes si la discusión de los salarios no se hace sobre la base de la organización sindical, porque no estarían negociando en ese contrato de trabajo partes iguales y, en consecuencia, no se respetaría el principio de libertad.

Nosotros estamos en desacuerdo con los que creen que la decisión de los burocratas debe determinar los precios y los salarios. Creemos que ambos deben expresar la realidad económica. Pero, justamente para que los salarios expresen esa realidad, deben emerger de las convenciones colectivas de trabajo, sobre la base de la discusión libre entre las partes. Y tal discusión será verdaderamente libre y expresión de la realidad económica y social si la parte sindical está organizada con base en el principio, consagrado por este proyecto, de la unidad sindical por rama de producción.

Nuestro actual apoyo al principio de unidad sindical es, hoy como en 1958, coherente con nuestra estrategia del desarrollo y con una política pensada para el mercado interno como un factor dinámico, concebida en función de que los beneficios del crecimiento no se orienten sólo a una minoría sino al conjunto de la sociedad.

De ahí que pensemos que para una política de desarrollo genuina, que no sólo involucre el aspecto económico sino también todo el campo social, se requiere una organización sindical fuerte —sin privilegios, pero fuerte—, que esté en condiciones de asegurar libertad e igualdad en la negociación de los contratos de trabajo.

Finalmente, para no repetir expresiones ya dichas durante el tratamiento de un proyecto semejante el año pasado, quiero señalar que apoyo sin vacilaciones este proyecto, pero tengo una reserva en cuanto al contexto en el que va a operar esta legislación para las organizaciones sindicales.

No me parece razonable que nos retiremos tranquilos porque hoy hagamos una buena acción sancionando esta ley. Con ello no basta;

a nuestro juicio es necesario que cambie el contexto de la política económica. Tenemos la experiencia de la reciente sanción de la ley de convenciones colectivas de trabajo, que atraviesa serias vicisitudes en razón de que el programa económico que se aplica sigue utilizando el salario como variable de ajuste.

A nuestro juicio, el apoyo al proyecto debe estar acompañado de un reclamo en el sentido de que haya un cambio profundo y global en la orientación económico-social que hay actualmente en el país. En este contexto de caída del salario —que está hoy en un 30 por ciento por debajo del valor de diciembre de 1983—, de desempleo y de profundización de la recesión, esta normativa no va a poder ser llevada a la práctica ni tendrá respecto del movimiento obrero todos los efectos que su letra determina. Debe cambiar la orientación económico-social vigente, es decir, debe modificarse el contexto de su aplicación.

Entonces, a nuestro juicio, junto con esta ley de asociaciones profesionales es preciso que este honorable cuerpo —como lo dije al tratar la cuestión de los jubilados— se aboque cuanto antes a debatir la política económica y social de fondo que se aplica actualmente. Es indispensable que cambie esa política para que los legisladores dejemos de sancionar leyes que finalmente pueden terminar siendo letra muerta.

Finalizo reiterando mi aspiración de que la Cámara tome nota de la grave situación social que vive el país y de la necesidad de debatir la cuestión a fin de que se lleve a cabo una política nueva, distinta de la que se ha venido aplicando en estos últimos cuatro años.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Monjardín de Masci. — Señor presidente: voy a expresar la posición del bloque del Partido Federal sobre este proyecto de ley. He preparado una guía para tratar de ser concisa y atenerme al desarrollo de los argumentos más sólidos en favor de esta iniciativa y que mejor expresan el pensamiento y el sentimiento de la gente de mi partido. Pero antes de hacerlo quisiera hacer una breve referencia, absolutamente improvisada, motivada por algunas cosas que he escuchado esta tarde.

Naturalmente hace muchos años fui joven e inexperta en el tema de las organizaciones sindicales. Cuando en el país apareció la gran discusión sobre este tema, consulté a mi padre, quien era mi maestro y dirigente político. Lo que me respondió en esa oportunidad está hoy dentro de mí y lo ha estado todos estos años. Me dijo:

"Con una organización sindical fuerte, que tenga quizás un sentido corporativo, que no permita esa pluralidad de bases y de movimientos sindicales que a uno le gustaría si el mundo y la sociedad fueran ideales, es posible que un empleador sufra de parte de sus obreros algún disgusto injusto; pero cuando no hay una organización sindical fuerte y los obreros y empleados no están unidos, es mucho más posible que un empleador injusto haga sufrir una tremenda injusticia a un obrero o a un empleado desvalido." (Aplausos.)

Ese sentimiento que llevo adentro desde entonces con mucho honor sería suficiente para elegir no lo perfecto, sino lo más justo para el más pobre, si por otro lado no me bastaran la decisión de mi partido y lo que escuché ayer gratamente de parte de varios señores diputados radicales. Ese recuerdo de las palabras de mi padre me bastaría para definirme hoy. Disculpeme, señor presidente, esta expresión tan personal, basada en que creo que a veces es posible decir estas confidencias entre amigos, como lo son ustedes, puesto que estamos en la misma lucha por el bien del país, si bien cada uno desde su punto de vista.

Entiendo que esto es lo que nos va definiendo y nos va mostrando a todos el camino. Hace relativamente poco tiempo tuve la oportunidad y la satisfacción de apoyar en este recinto el proyecto de ley sobre convenios colectivos de trabajo. Hoy tengo la misma sensación de aquellos días, por la importancia que asigno a un régimen legal sobre asociaciones profesionales de trabajadores, especialmente cuando la norma a la que daremos nuestro voto afirmativo tiene características respecto de las cuales voy a permitirme hacer algunas referencias muy sintéticas.

Los Estados con alto grado de desarrollo industrial que son identificados con el nombre de países desarrollados no sólo reciben esa denominación por su desarrollo económico, su prestigio cultural e intelectual y sus valores espirituales, sino también porque han alcanzado etapas muy importantes en el plano de su ordenamiento institucional. Pretendo hoy para nuestro país que por medio de la sanción de estas leyes se vaya completando su ordenamiento institucional. Es por ello que, más allá del alto valor que tiene en sí mismo el establecimiento de un régimen legal sobre organizaciones sindicales, corresponde situar el paso parlamentario que se va a dar como otra concreción dirigida a mejorar el ordenamiento jurídico de organismos fundamentales como éste.

Debemos ver y analizar la realidad con interpretaciones que no respondan a los deseos del analista, sino a una objetiva exégesis de tal realidad; o sea que no debemos pretender que cada artículo, punto y coma coincidan perfectamente con nuestro ideal.

El movimiento sindical constituye una estructura de la mayor importancia en el cuerpo social argentino, como resultado de un largo proceso cumplido principalmente en la historia reciente de nuestro país. Hay que reconocer que el sindicalismo es uno de los fenómenos sociales más significativos de este siglo. El nivel que alcanzó se expresó con diferencias muy marcadas en casi todos los países del mundo libre. Sin embargo, casi todos los aquí presentes, la mayoría de nosotros, hemos sido testigos de que en la Argentina alcanzó un nivel indiscutiblemente no común, más alto que el de muchos otros países, principalmente los que están en vías de desarrollo. Esto es positivo y seguramente se irá perfeccionando con la sanción de normas como la que hoy estamos considerando.

En nuestro país los sistemas legales establecidos para regular la organización y el funcionamiento de las asociaciones sindicales se diferencian según los distintos regímenes políticos gobernantes.

Hasta aquí ésta es la historia conocida. La auspiciosa verdad de esta hora legislativa la constituye el hecho de que una gran mayoría parlamentaria que tengo el honor de integrar está coincidiendo en un sistema legal que en lo fundamental puede tener larga vida en la organización jurídica de la Nación, aun admitiendo que no es perfecto o que podríamos haber analizado en forma más profunda algunos de sus artículos. Pero el camino recorrido por este proyecto ha sido demasiado largo; en respeto a ello mi partido no hará hincapié en algunas de las diferencias que podamos tener con respecto a determinados artículos, porque sabemos que los legisladores del futuro, a medida que esta norma se vaya aplicando, tendrán oportunidad de corregirla y perfeccionarla.

En el largo camino recorrido por este proyecto desde su estructuración y hasta su concreción, se tuvo en cuenta lo que se fue generando espontáneamente en la realidad del mundo sindical, que ya con un alto grado de desarrollo alcanzado reclamó que el orden jurídico respetara esa realidad dada y también su pensamiento. Contó a su favor con el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que en nuestro país fuera ratificado mediante la ley 14.932. No olvidemos que el aludido convenio reconoce a las organizaciones

de trabajadores el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y formular un programa de acción; asimismo, advierte a las autoridades públicas que deben abstenerse de toda intervención que limite esos derechos o entorpezca su ejercicio legal. Esta es una señal que nos indica que no estamos equivocados al sancionar esta iniciativa, porque respetamos el espíritu que surge de un organismo internacional. Ello tiene gran valor porque a pesar de que consideremos que la norma puede ser perfeccionada o corregida, sabemos que estamos cumpliendo con algo que la experiencia de legisladores y dirigentes sindicales mundiales ha señalado como un camino positivo a seguir.

Esta legislación internacional que constitucionalmente hemos incorporado fortalece sensiblemente las posiciones muchas veces ratificadas por el movimiento obrero en todo el mundo y tiene base en la conformación orgánica y funcional que debe darse legislativamente a las entidades del trabajo.

Pero más allá de lo que acabamos de consignar, corresponde señalar que el régimen legal para nuestro país será bueno si se asegura una representación lo más auténtica posible de la voluntad de los trabajadores. Y como ello es lo que ocurre con el proyecto en tratamiento, considero legítimo que la unánime voluntad parlamentaria se exprese por su aprobación.

Nuestra trayectoria histórica nos muestra que debemos perseverar para lograr que sea justa, equitativa y equilibrada la composición de los distintos sectores nacionales, y ésta es una de las claves de este proyecto. Ningún sector debe prevalecer sobre otro porque ello no es bueno para ninguna sociedad. Lo que intentamos mediante esta iniciativa es buscar un equilibrio que evite que un sector prevalezca sobre otro, ya que ello puede generar injusticias; tampoco ninguno debe ser descalificado por el solo hecho de que así lo determine el juicio de sus juzgadores. Si la realidad muestra que algo es de determinada manera, reconozcámoslo y respetémoslo; ésa será la única forma en que se ganará el derecho a pedir reflexión y moderación en los comportamientos, para restablecer en una sociedad los equilibrios alterados. No olvidemos que nosotros hemos vivido una dura experiencia de alteración de equilibrios.

Este es un sistema que permite que la disputa de intereses entre patrones y trabajadores tenga lugar dentro de un marco pacífico, y que se puedan lograr las soluciones por medio del consenso y no a través de los sistemas de lucha, con toda la rispidez y los desencuentros que generan siempre las disputas violentas.

Creo que ya nadie ignora cuánto importa una relación corriente, intensa, y si es posible serena, entre los principales factores de la producción, como lo son en el mundo occidental el capital y el trabajo. Todo cuanto se haga para favorecerla incrementándola, fortaleciéndola y reconociéndola públicamente como de la mayor utilidad, constituirá un gran servicio que se prestará a la causa de la paz social, que es tan cara y tan necesaria hoy y siempre para los argentinos. Me refiero a esa paz social que todos tenemos la obligación legal y la necesidad moral de garantizar.

En el apoyo que doy a este proyecto de ley en nombre del bloque del Partido Federal va implícita mi confianza en la madurez y grandeza del pueblo argentino y de los dirigentes sindicales del país. Esta confianza, este acto de fe, significan una esperanza, un deseo: que esta ley sea empleada con absoluta honestidad y responsabilidad tanto por parte de los obreros como de los dirigentes sindicales. Digo esto con profunda convicción, tal como lo hiciera en esta misma Cámara meses atrás.

Esos son los motivos de mi voto personal y, por lo expuesto, manifiesto en representación del bloque del Partido Federal nuestro apoyo al proyecto de ley en consideración.

10

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Silva (R. P.). — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Silva (R. P.). — Señor presidente: de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, tengo el derecho de plantear una cuestión de privilegio por considerar que las declaraciones efectuadas por el gobernador de mi provincia vulneran el funcionamiento de este cuerpo y el decoro de quienes somos miembros de este Parlamento.

El doctor Reviglio, gobernador de la provincia de Santa Fe, ha dicho en recientes declaraciones que dentro de sesenta días la provincia se encontrará en igual situación que Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja. Esas declaraciones demuestran o bien una falta de conocimiento del señor gobernador o bien una actitud irresponsable de su parte. Lo cierto es que un gobernador desde ningún punto de vista debe hacer apreciaciones de ese tipo.

En el día de hoy, debido a esas declaraciones, el Banco de la Provincia de Santa Fe ha sufrido

corridas en sus fondos, y creo que esto no le hace bien a la provincia.

Esta provincia estuvo gobernada durante cuatro años por el doctor Vernet y él transmitió el gobierno a su sucesor, luego del voto popular...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Silva (R. P.). — En la campaña electoral, decía: "Más para Santa Fe"...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Silva (R. P.). — "No dé la vuelta", decía su *slogan*; hay que seguir creciendo; y resulta ser que a los dos meses nos encontramos con una provincia en crisis...

Sr. Ball Lima. — ¿Cuál es la cuestión de privilegio?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Duhalde). — Sírvanse los señores diputados respetar al orador, que dispone de diez minutos para plantear la cuestión de privilegio.

Sr. Silva (R. P.). — El gobernador ha hecho responsable al gobierno de la Nación, que integramos todos los representantes de los tres poderes. Nos sentimos molestos y heridos por esas declaraciones y por la irresponsabilidad manifiesta de colocar a la provincia prácticamente al borde del caos.

Además, el ex gobernador Vernet fue el gestor de aquel convenio o acuerdo que después fue ratificado por esta legislatura. Lo que sucede es que se mintió en la campaña electoral, porque se decía que la provincia estaba bien, que se pagaban los mejores sueldos del país, y resulta ser que a los dos meses de la asunción de las nuevas autoridades está al borde de la disolución.

Pero esto no es novedad. Ello ocurre en todo el país, y precisamente en las provincias gobernadas por el Partido Justicialista.

Por estas razones me siento molesto, ya que las declaraciones del señor Reviglio rozan el decoro y la dignidad de este Parlamento. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Se va a votar si la cuestión de privilegio reviste carácter preferente. Se requieren dos tercios de los votos que se emitan.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Duhalde). — La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

11

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Carignano. — Señor presidente: no es posible que cada uno de los diputados que están aquí sentados quiera utilizar este foro tan importante para plantear cuestiones cuyo debate no corresponde estrictamente a este ámbito. No se puede utilizar la vía reglamentaria irresponsablemente...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Carignano. — El señor diputado Silva no puede plantear este debate luego de la derrota más estrepitosa que ha sufrido el radicalismo en los últimos años. (*Aplausos.*) No puede hacerlo después que 250 mil votos de ventaja testimoniaron la acción de un gobierno justicialista. Hoy la Unión Cívica Radical quiere demostrar a la sociedad, por vía del ahogo financiero, que el peronismo no puede gobernar las provincias. No es éste el método, señor diputado. El método debe pasar por un debate con altura; como decía el señor diputado Estévez Boero, por el diálogo, por el consenso...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Carignano. — Por eso, solicito a los señores diputados aquí presentes que no utilicen este foro para realizar este tipo de exhibiciones gratuitas de las propias falencias que la oposición demostraba en mi provincia de Santa Fe, donde nunca supieron ni fueron capaces de señalar un solo error del gobierno provincial.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Duhalde). — Corresponde proseguir con la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo.

12

REGIMEN LEGAL DE LAS ASOCIACIONES
SINDICALES DE TRABAJADORES

(continuación)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Cardozo. — Señor presidente: he observado azorado (*risas*) un pequeño debate que respetuosamente he escuchado porque el reglamento autoriza a los señores diputados a expresarse dentro de sus términos...

Sr. Jaroslavsky. — El señor diputado debe ceñirse a la cuestión en tratamiento.

Sr. Cardozo. — Señor presidente: en honor a los trabajadores argentinos me voy a referir al proyecto de ley en debate, lo que no significa dejar de señalar, como expresé al comienzo de mi exposición, que me sorprende la cuestión de privilegio planteada, que tiene que ver con la provincia a la que represento. Creo que los trabajadores merecen el más absoluto respeto de todos los integrantes de la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Por fin los trabajadores argentinos, luego de un largo tránsito en esta democracia, tendrán la oportunidad de celebrar esta noche, aunque sea parcialmente, el final de las leyes sancionadas por la dictadura militar.

Quien habla también lo celebra, porque esta noche el movimiento obrero encuentra en un puñado apretado de artículos la posibilidad concreta de desarrollar su actividad en el marco legal de la democracia.

Aún no puedo comprender cómo hemos demorado tanto, a pesar de que podría explicarlo.

Celebro también la presencia en un palco de esta Honorable Cámara de la Confederación General del Trabajo, encabezada por su secretario general, Saúl Ubaldini. (Aplausos.)

Duras luchas afrontó la CGT para llegar a obtener un resultado que mínimamente contemple el desarrollo de la vida laboral, lo que significa la práctica del sindicalismo en una democracia plena. Sin duda, los argentinos recordarán con aprecio a ese compañero trabajador que conduce hoy la central obrera. Recordarán sus luchas y quienes nos sigan también recordarán este momento, porque es el de la consagración, la tipificación y la definición que en materia laboral estábamos buscando los trabajadores.

En este recinto se escucharon voces que, como dijo mi querido y estimado compañero de bancada Lorenzo Pepe, también nos sorprendieron. Me refiero al discurso liberal, en el que se dejan de lado cuestiones que en el pasado eran claras para los liberales, quienes lo demostraron con una actitud de contribución y comprensión para los trabajadores argentinos.

Cuando esperaba una palabra de apoyo para una posición que las grandes mayorías argentinas habían asumido como propias, escuché expresiones que me dolieron como legislador, pero en primer lugar como trabajador.

Seguramente los liberales olvidaron que en 1904 Joaquín V. González propuso un Código Laboral que contemplaba el contrato de traba-

jo y normas sindicales. En aquel momento fue boicoteada la posibilidad de que los trabajadores se desarrollaran dignamente en su actividad laboral. Aquellos liberales eran indudablemente muy distintos a los de ahora.

Mi pueblo tiene muy poco que ver con esas expresiones y por eso es que no comprendo la palabra pueblo en esa concepción. Pueblo es símbolo de trabajador, libertad es sinónimo de trabajador, democracia es sinónimo de trabajador, y justicia social también lo es.

¿O no fuimos los trabajadores los que luchamos por la libertad en nuestro país? ¿O no fueron trabajadores los que asesinó la dictadura militar? ¿O no fueron trabajadores los que pagaron en las cárceles de este país con sus vidas la lucha por la causa del pueblo? ¿O no fueron trabajadores los que lucharon por la democracia argentina junto a aquella dirigencia política que tenía claro el concepto de que se construye una sociedad mejor si hay democracia?

Esa es la libertad que yo entiendo; aquella en la que los trabajadores pueden vivir y ver crecer a sus hijos con dignidad. La libertad que entendemos los trabajadores es aquella en la que con el fruto de nuestro trabajo podemos solventar una familia que dignamente pueda construir el país que soñamos y queremos los argentinos y que sin duda es el deseo de la mayoría.

En este recinto se escucharon expresiones como la de la señora diputada del Partido Federal, quien recordó a su padre, que guió sus pasos en la justicia.

Tengo que admitir que sin duda ha quedado claramente identificada la imagen de aquellos trabajadores que, como José Ignacio Rucci, Dirk Kloosterman y muchos más lucharon defendiendo la causa de la democracia y la libertad del pueblo y pagaron con sus vidas esas luchas. Por eso, como decía el señor diputado por San Juan, había una deuda que saldar. Se trata de la deuda con los trabajadores, con la central obrera y con los sindicatos, que legítimamente podrán elegir a los compañeros que los conducirán, imbuidos sin ninguna duda de la voluntad propia de los trabajadores.

Por eso digo que llegamos tarde. No tan tarde como para volver a empezar, pero tarde en la decisión de contemplar con alborozo el resultado. No me olvido de que en este mismo recinto no existía este silencio cuando discutimos la ley Mucci; pero me alegra que hayan comprendido. Hemos unificado el criterio y nos hemos puesto del lado del "se puede". Se puede cuando hay conciencia de la necesidad de crear un país distinto. Se puede cuando hay conciencia de que se requiere otorgar a un sector de

la sociedad tan importante como el de los trabajadores la herramienta principal para su desarrollo. En todos los problemas que sufre este país se puede encontrar la solución, como lo vamos a hacer esta noche.

Los trabajadores tienen que lograr el sustento y el salario digno que merecen. Tienen que poder vivir en un país que esté de acuerdo con sus merecimientos. ¡Por supuesto que se puede! Es cuestión de entendernos y de comprender que la lucha política e ideológica debe comenzar siempre por contemplar la necesidad del que sufre, del más humilde, del que más paga los errores de la política y del que más se ve perjudicado por las equivocaciones de los gobernantes. Se debe construir a partir de esta premisa. La iniciativa que discutimos hoy constituye un claro ejemplo de ello.

Nuestros jubilados fueron y son trabajadores. Con ellos también tenemos una deuda que habremos de pagar. Debemos hacerlo sobre la base de este contexto del "se puede". Debemos dignificar la trayectoria de los políticos en la vida argentina y debemos ayudar a la dirigencia sindical a conseguir lo que merece.

Tenemos que ser capaces de entender, de razonar y de utilizar el criterio que implica que no se puede aspirar a una vida mejor si nosotros no somos capaces de hacerla por nuestros propios medios. La ley es la herramienta y el medio. Decía el general Perón: "Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada". Hagamos la ley, construyamos el país que merecemos. Bajemos la bandera cuando nos equivoquemos.

Por supuesto que el gobierno comete errores en muchas cuestiones. En algunos casos nosotros también nos hemos equivocado. Pongamos adelante la otra bandera, la del pueblo, quien nunca se equivoca. Atendamos sus reclamos y sus necesidades. Empecemos a hablar del "se puede". Pongamos en marcha una acción política que defienda lo que sustenta el movimiento obrero: una vida mejor y más digna, desarrollada en un país que tiene que crecer y dejar de ser subdesarrollado para avanzar en todos los órdenes.

Se trata de que no existan chicos que menden en la calle, en los bares y en las veredas. Se trata de que no haya jubilados a quienes sus haberes no les alcanzan ni para alimentarse. Se trata de que los trabajadores no tengan necesidad de convertirse en cuentapropistas. Se trata, finalmente, de que no tengamos empresarios que vean caer sus fábricas.

Por supuesto que podemos. Lo hemos demostrado. Cada vez que coincidimos pronunciamos

este discurso. Hagámoslo para siempre, creemos una Argentina mejor, sentémonos a la mesa hasta para acordar el disenso y dejemos claramente establecido que este Parlamento puede encontrar para el país las soluciones que merecemos todos los argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: el señor diputado Cardozo tiene razón. Es la hora de las responsabilidades. Precisamente, el bloque de la Unión Cívica Radical, en virtud de la responsabilidad que le cabe por ser el partido del gobierno, viene hoy a cumplir con los compromisos contraídos y a dar sanción a este proyecto de ley de organizaciones sindicales, porque más allá de las discrepancias que podamos tener — y de las cuales no abdicaremos en nuestras posiciones futuras para el logro de las modificaciones respectivas— entendemos que el sindicalismo argentino cumple una etapa fundamental en esta sociedad moderna e industrial y que el sindicato debe ser, junto con el movimiento sindical en su conjunto, un elemento de contrapeso frente al accionar del capital, que a veces ha demostrado una voracidad insaciable en la persecución de ventajas económicas.

El radicalismo, apegado a los derechos sociales — como lo demuestran los antecedentes que algunos de mis compañeros ya han señalado y que otros seguramente mencionarán con mayor amplitud—, viene aquí a cumplir con su compromiso, porque este partido y este bloque asumen sus responsabilidades y no quieren dejar un día más al sindicalismo argentino sin una ley que lo reglamente, sin perjuicio de las reivindicaciones que algún día, en virtud de la perfectibilidad de las leyes, tiendan a lograr la participación de las minorías en los cuerpos directivos de los gremios, vieja conquista reclamada por un conjunto de trabajadores, acerca de lo cual podemos discrepar o coincidir. Quedarían pendientes también los temas vinculados con la representación y la antigüedad, la forma de revitalizar el sindicato de base y otras cosas más.

Entendemos que el sindicalismo tiene un rol preponderante en la vigorización del sistema democrático y que el sindicato no es una ínsula dentro del país. Sabemos que esto no lo puede malinterpretar nadie: el sindicato no es un Estado dentro del Estado sino una institución perteneciente a la sociedad con una concepción globalmente democrática.

Esta noche venimos a dar nuestro aval a la sanción de este proyecto, a cumplir con el movimiento obrero argentino, a hacer algunas re-

fléxiones sobre lo que este movimiento significa, sobre su nacimiento y sus características, y a decir qué esperamos del nuevo sindicato en la República Argentina, de este nuevo sindicato adecuado a la época que estamos viviendo.

Por ello debemos señalar en primer lugar que este sindicalismo nace verdaderamente en la década del 40, porque antes de esa época existió con otras características humanas e ideológicas. Y nace en la década del 40 precisamente porque la Argentina venía de atravesar la crisis económica mundial del año 30. Con ella se había terminado la caracterización de país agro-exportador que tuvimos entre los años 1880 y 1930 y nos encontrábamos en la necesidad de crear industrias sustitutivas en materia de elementos necesarios para la Nación.

Junto con esto se producía en la República Argentina un fenómeno especial que impulsó un cambio social de alto vuelo y particulares características. Por un lado nace la industria liviana, que procura sustituir importaciones. Pero también se produce una corriente migratoria desde el interior del país hacia los grandes centros urbanos. Esta corriente migratoria está integrada por aquellos que, al quedarse sin fuentes de trabajo, pasaron a constituir la gran clase del proletariado urbano-industrial. En su conjunto, ellos fueron quienes produjeron en la Argentina la verdadera revolución de la industria liviana y un cambio social al que hubo que dar respuestas políticas.

Nosotros, los radicales, que tenemos sentido de la responsabilidad, aceptamos los errores cometidos y afirmamos permanentemente nuestros principios, reconocemos que en aquella década del 40 nuestro **partido**, pese a su clara vocación y principios democráticos, no dio a este movimiento la trascendencia social que él tenía. Es así que aparece el peronismo, cuya caracterización es la de dar una respuesta social a esta nueva clase que quería ser entendida. Esta es parte de nuestras culpas y hemos pagado nuestros pecados a través de la historia, pero tenemos el suficiente valor como para saber autoconfesarnos. (*Aplausos.*)

Así surge la clase sindical, cuya existencia se prolonga desde aquel momento hasta el presente. Sus objetivos eran, fundamentalmente, reivindicativos y distribucionistas. ¿Por qué reivindicativos? Porque verdaderamente sus integrantes querían poner en vigencia las conquistas sociales fundamentales, como el horario determinado, las condiciones de salubridad, el pago adecuado, las vacaciones, el aguinaldo y otras. Eran conquistas totalizadoras que el movimiento obrero quería poner en vigencia.

Pero a su vez esa clase sindical tenía, como he dicho, un objetivo distribucionista, porque entendía que el incremento del salario constituía un tipo de conquista social y asimilaba la justicia social a ese incremento. Con una lógica y entendible razón, el movimiento obrero reclamaba en aquel entonces su participación en la ganancia, es decir, lo que nosotros graficamos diciendo que quería participar en la riqueza acumulada en parte en barras de oro en el Banco Central de la República Argentina. Era esa una forma de querer participar en la distribución de la riqueza en una época muy especial de la Argentina, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Todo esto da lugar a ese nuevo movimiento cuya caracterización, por supuesto, está determinada por la migración hacia los centros urbanos de esa clase obrera rechazada por algunos sectores de la sociedad y cuyos integrantes fueron conocidos por otros como los famosos "cabecitas negras". Fueron esos cabecitas negras de aquel momento los que impulsaron el movimiento obrero y el sindicalismo al cual nosotros, no obstante las críticas y las discrepancias que podamos haber tenido acerca de sus características —tal vez autoritarias y en cierta forma centralistas—, o de la formación de aportes a la inversa de como a nosotros nos gusta —no de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo—, le reconocemos que cumple una función integradora de esa clase social, función que es absolutamente necesaria.

Esa migración no tenía, por así decirlo, gimnasia sindical, y no se podía dejar librada a la iniciativa individual la participación en la reforma social que se produce en la Argentina y que implica un profundo cambio. Aquí nace el sindicalismo que perdura con esas características.

También cabe analizar otros fenómenos, como lo que sucede en la década del 50, finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuando prácticamente Europa comienza su reconstrucción contando con el apoyo financiero ilimitado de los Estados Unidos. Es entonces que nos encontramos con que nuestra industria liviana no había podido fortalecerse lo suficiente, no teníamos abastecimiento de combustibles, no existía un desarrollo siderúrgico ni petroquímico y no había capacidad para importar insumos industriales. Aquí comienza una etapa decadente en la Argentina, que se caracteriza por el estancamiento, pues es cuando prácticamente nuestro país detiene su crecimiento. Si alguien analiza el crecimiento del producto bruto en dichos

años, así como el ingreso per cápita, observará que si bien suben lo hacen en una forma muy atenuada.

Entonces comienzan a surgir en el país las pugnas distributivas por los ingresos de los distintos sectores de la sociedad. Aparecen en la sociedad argentina características propias de un neocorporativismo, es decir, la pugna de los sectores sin tener en cuenta que están integrando un conjunto social al cual se deben. Se produce una situación en la que nadie abdica de su posición y en la que cada sector ubica su interés por encima del de los demás.

También se origina el fenómeno de la inflación: el incremento de los precios y la política emisionista de un Estado que quiere saldar las cuentas de los sectores en pugna y para ello emite dinero. Asimismo, surgen los desencuentros económicos y el detenimiento del crecimiento de la Nación.

Esta situación resulta agravada durante los gobiernos autoritarios, que hacen desaparecer las barreras proteccionistas y cambiarias, sometándonos a una política de importaciones que destruye la industria argentina. Así se llega a tener una industria destruida y a sufrir la inercia del estancamiento. Nosotros queremos quebrar esa inercia, provocando en la sociedad profundos cambios estructurales. Así es como venimos a dar al sindicalismo argentino nuestro voto favorable a este proyecto porque creemos que en definitiva estamos cumpliendo con una etapa importante. En tal sentido, reclamamos al nuevo sindicato que cumpla un rol adecuado a esta política de transformación estructural que nosotros anhelamos.

Con todo respeto decimos a los amigos sindicalistas que ha cambiado la Argentina; ya no es el país de la pugna distributiva para conseguir el incremento nominal del salario. Aquí las cosas han cambiado porque no hay riquezas para distribuir.

En el país actual existen condiciones distintas que debemos aprovechar. Existen un Estado de derecho, una total vigencia democrática, libertades públicas, derechos humanos, ejercicio pleno de la soberanía nacional y un prestigio internacional recuperado.

Este es el momento oportuno para que el sindicalismo —no dudo que lo harán, tanto los viejos dirigentes como los nuevos que se están incorporando—, demostrando su sentido de responsabilidad, se una en la búsqueda del objetivo de lograr el crecimiento de la riqueza. No debe olvidar que la base fundamental reside en que el enriquecimiento del país es el único instrumento válido para incrementar el salario real.

No hay otra variante; no hay posibilidad de seguir discutiendo salarios nominales. Ese concepto pertenece a la ciencia ficción; ha muerto.

El trabajador, representado por su sindicato, debe discutir condiciones de productividad y de capacitación de la clase obrera frente a un proceso transformador y a los avances de la tecnología. Ese proceso está pasando delante de nuestros ojos y nosotros debemos sumarnos a él para alcanzar el crecimiento económico. Asimismo, los sindicatos deben procurar la capacitación de sus obreros, teniendo en cuenta los progresos de la tecnología, la robótica y demás ciencias; no olvidemos que el obrero que se margine de este proceso transformador no se hallará en condiciones de poder adaptarse a la nueva sociedad.

Para el logro de todos estos propósitos existen herramientas fundamentales. Por eso nosotros, los radicales, bregamos por la concertación como arma esencial que supone una decisión política que debe tomar el movimiento obrero de abandonar para siempre la confrontación para alcanzar el consenso.

En la mesa de la concertación deben sentarse, por supuesto, los sectores del capital y del trabajo y también el Estado, para discutir no sólo condiciones salariales sino aspectos relativos al ingreso real y a la productividad.

El mundo ha cambiado; también la realidad social. Ya no existe el reclamo global del sindicalismo. Hoy han variado las características de sus exigencias. Es distinto el obrero de SMATA a los técnicos en computación; hay diferencias entre los ingenieros en sistemas y los ferroviarios. Entonces hay que ensamblar todo esto en la nueva estructura social y económica en que nos toca vivir.

Entendemos que es fundamental la concertación como herramienta para este sindicalismo nuevo en cuya responsabilidad verdaderamente descansa todo un futuro. Queremos acompañar a este sindicalismo argentino y también queremos decirle que tiene la responsabilidad de estudiar un fenómeno que es un derecho irrenunciable de la clase trabajadora: el derecho a la huelga, que fue incorporado al artículo 14 bis de la Constitución Nacional justamente por un radical: Crisólogo Larralde.

Es un derecho irrenunciable por medio del cual el movimiento obrero logró conquistas extraordinarias. Pero desde el punto de vista doctrinario y principista este derecho tiene que ser una herramienta revolucionaria por excelencia. No puede ser un instrumento de uso continuo que atente contra las condiciones económicas de la sociedad y obstaculice la prestación de los servicios públicos.

Es decir que hay que estudiar el derecho de huelga. Algunos piensan que tendría que venir la limitación por una ley. Particularmente, junto con otros correligionarios, tal vez en este autoexamen que hacemos los radicales reconociendo el error histórico del 40, pedimos al movimiento obrero que reflexione sobre esto y que piense si no habrá llegado la hora de implantar la autorregulación del derecho de huelga por parte de los mismos sindicatos.

¿Por qué no pensar en el ejemplo de un sindicalismo tan combativo como el italiano que, aunque tiene tres centrales distintas, en el verano del 86 se dio un estatuto normativo de la huelga en los servicios de transportes? Por medio de ese estatuto los trabajadores italianos se comprometieron a no hacer huelgas en la temporada alta, porque saben que necesitan del turismo. Los sindicalistas italianos quieren captar ingresos porque comprenden que eso acrecienta la "torta" de la riqueza a distribuir. Los italianos también se comprometieron a no hacer huelga en los fines de semana que resultan "largos" por haber días de fiesta, así como a anunciar los paros con ocho días de anticipación y a que duren en una primera instancia 24 horas, luego 48, y así sucesivamente, de modo que su extensión aumente en forma gradual.

Estamos ante una nueva convivencia democrática y ante una nueva racionalidad que debe permitirnos a todos —políticos y obreros por igual— entrar en un diálogo abierto, entendiendo que aunque la democracia exige la presencia de un gobierno y de una oposición, el movimiento obrero puede no estar con el gobierno pero no debe constituir permanentemente la oposición, ya que en tal caso terminaría anulando la razón misma de la existencia del sindicalismo de base. Estos son criterios fundamentales.

Verdaderamente queremos un sindicalismo fuerte. Defendemos un sindicalismo fuerte porque entendemos que él es el que canaliza los reclamos salariales. Pero en este nuevo proceso democrático, en esta nueva Argentina, frente a los cambios estructurales, esperamos de este sindicalismo que sea punta junto con los demás sectores de la sociedad en el afianzamiento del proceso democrático, en el logro del crecimiento económico y en la concreción de una más justa distribución de la riqueza. (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Martínez (L. A.). — Señor presidente...

Sr. Avila Gallo. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente (Duhalde). — Señor diputado Martínez: el señor diputado Avila Gallo le solicita una interrupción.

Sr. Martínez (L. A.). — Pido a la Presidencia que informe al señor diputado Avila Gallo que voy a efectuar mi exposición, y una vez que concluya podrá él hacer uso de la palabra.

Sr. Avila Gallo. — Es que me correspondía el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Duhalde). — Señor diputado: quisiera aclararle que hemos recibido el pedido de un secretario suyo de que se lo postergue en la lista de oradores.

Sr. Avila Gallo. — No he efectuado tal pedido, señor presidente.

Sr. Presidente (Duhalde). — La Presidencia le pide entonces las disculpas correspondientes. Luego le dará el uso de la palabra.

Está en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Martínez (L. A.). — Señor presidente: he escuchado, no voy a decir que azorado —porque este término se ha repetido dos o tres veces—, pero sí con bastante preocupación, algunas expresiones de buena voluntad y algunos reconocimientos que recuerdan el *mea culpa* de los cristianos en el pasado. Sin embargo, estas expiaciones no se corresponden con la confusión profunda que existe respecto de las organizaciones gremiales, los dirigentes sindicales y la clase trabajadora.

Escuché a algunos amigos diputados hablar de la clase sindical. Para su información, diré que quienes aquí representamos a la dirigencia sindical jamás mencionamos la expresión "clase sindical". Nosotros reconocemos una única clase: la trabajadora.

También se dijo aquí que en la modernidad no es lo mismo un ingeniero de sistemas que un ferroviario. Esa discusión ha sido superada históricamente por la clase trabajadora y por sus dirigentes sindicales, que tal como nos enseñara el general Perón sólo reconocemos una clase de hombres: los que trabajan. Parece que aquí debemos recordar algunas cuestiones que se refieren a la esencia del hombre, porque aunque con diferentes esfuerzos el ingeniero de sistemas y el ferroviario sólo son trabajadores.

Asimismo escuché hablar del gremialismo reivindicativo, asistiendo estupefacto a una lección de democracia para la dirigencia sindical. Se pretende decirnos —esto lo señalo como dirigente gremial— que ahora debemos aprender la lección de la "moderna democracia", de la "gobernabilidad", que debemos saber que estamos viviendo en un nuevo sistema, el democrá-

tico, y que no podemos hacer uso del derecho de huelga si no es primero por 24 horas, luego por 48, etcétera. En este sentido, debo recordar que cuando en este país hubo justicia social, establecida por gobernantes que sólo accedieron al poder por medio del voto popular, no hizo falta incluir el derecho de huelga en la Constitución Nacional. Por supuesto, me estoy refiriendo a lo acaecido en 1949.

Con impunidad y ligereza hoy se pretende decir a la dirigencia sindical argentina que debe seguir los ejemplos de la dirigencia sindical de los países "allende el charco". Esto me retrotrae a la generación del 80, en la que había "bárbaros" y "civilizados". Hoy los "bárbaros" sindicalistas argentinos tienen que mirar "allende el charco" para ver a los "civilizados" sindicalistas italianos.

Sr. Bisciotti. — ¡El señor diputado no me ha entendido! ¡Hay que conseguirle un traductor que le explique la grandeza de mis expresiones en contraposición con la pequeñez de sus manifestaciones!

Sr. Martínez (L. A.) — Señor presidente: yo he escuchado con absoluta concentración las exposiciones que se han vertido en esta Cámara; por lo tanto, exijo el mismo respeto.

¡Los "bárbaros" sindicalistas argentinos tienen que aprender de los "modernos" y "demócratas" sindicalistas europeos; aunque el movimiento obrero argentino de la década del 40 fue el más avanzado del mundo entero! Aquí se inscribe también la contradicción de algunos que nos dicen que quieren un sindicato fuerte pero no con capacidad de confrontar con los poderes fuertes. Esto es igual que decir a los argentinos que tienen la libertad de morir como quieran, pero no de elegir el tipo de entierro.

Estas son las cosas de las que se ocupó, se ocupa y se ocupará el sindicalismo argentino frente a quienes han actuado desde otros poderes.

Señor presidente: no puedo dejar pasar por alto esta intencionalidad de pretender hacer creer a la dirigencia sindical argentina que hoy venimos graciosamente a regalarle una ley sindical. Esto es una falacia. Aquí se pretende hacer creer que la buena voluntad de los políticos es la que otorga y paga la deuda que se tiene con la dirigencia sindical. Sin embargo, ésta tiene muy en claro que las deudas que tienen los sectores del poder no son con los dirigentes sindicales sino con el pueblo en su conjunto.

Nosotros sí reclamamos la organización sindical fuerte, pero en serio. Y para aquellos que hablan de monopolio y que nos dicen que quie-

ren una organización sindical fuerte pero no monopólica, yo les contesto que sé dónde está el nudo gordiano: no quieren decir que no hay organización sindical fuerte si no es económicamente fuerte. Este es el único mecanismo que permite lograr un equilibrio para discutir por el poder de igual a igual.

¿Qué es lo que históricamente hizo esta organización sindical monopólica —para muchos— en la Argentina? Es la que permitió que el conjunto de los argentinos, sin discriminación alguna, pudiera acceder gracias a su fortaleza económica, por ejemplo, a un período de vacaciones en un hotel como la gente, que hoy es utilizado hasta por gobernantes y empresarios.

La organización sindical es la que ha venido a cubrir todas las necesidades de los trabajadores; sin embargo, hoy se nos dice que sólo es "reivindicativa".

En mi condición de diputado de la Nación y de dirigente sindical no puedo dejar pasar por alto mi opinión sobre esas lecciones que se pretende darnos a fin de que aprendamos los tiempos y comprendamos la democracia. Mucho menos puedo dejar de puntualizar algunos errores conceptuales de fondo que se han vertido, como el de que la clase sindical quiere participar de las barras de oro amontonadas en los bancos o no sé donde.

Sr. Bisciotti. — ¡No comprendió la grandeza de mi mensaje!

Sr. Martínez (L. A.) — La dirigencia sindical jamás quiso participar de ninguna otra cosa que no fuera el trabajo acumulado del hombre, que es el capital. La dirigencia sindical argentina ha pretendido y seguirá pretendiendo participar en el capital, que es la consecuencia del trabajo acumulado.

Sr. Jaroslavsky. — ¿Usted quiere la ley o pretende sabotearla?

Sr. Martínez (L. A.) — Quiero dejar absolutamente en claro que esta iniciativa —que es patrimonio de la organización sindical— se halla por encima de los dirigentes sindicales y de las organizaciones políticas. Esta es la única manera de fortalecer la democracia institucional, poniéndola al servicio —como ha sido puesta— de los intereses de la Nación en su conjunto.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Avila Gallo. — Señor presidente: antes de considerar el proyecto de ley en discusión, deseo informar a la Cámara que en Tucumán la violencia ha llegado hasta los despachos oficiales; se han peleado ministros y funcionarios, y ha sido hospitalizado un senador provincial. Esto demuestra la gravedad de la situación...

Sr. Presidente (Duhalde). — La Presidencia ruega al señor diputado que se cña al tema en discusión.

Sr. Avila Gallo. — Se trata de un problema de sensibilidad social. Además, quería traer a colación esta situación porque en la sesión pasada los señores diputados no quisieron escuchar...

Sr. Presidente (Duhalde). — Señor diputado: reitero que debe ceñirse al tema que está a consideración de esta Cámara.

Sr. Avila Gallo. — Así lo haré, señor presidente. Sólo deseaba que la Cámara tuviera la información oficial de lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán.

En lo que se refiere a la iniciativa en discusión, quiero felicitar fundamentalmente a la dirigencia sindical del país, que ha concretado su aspiración de contar con una legislación que regule el régimen de asociaciones sindicales. Pero debo aclarar que el bloque de la Defensa Provincial Bandera Blanca —cuyo origen es eminentemente federal—, desgraciadamente, por principios, no podrá acompañar a la mayoría de la Cámara en la sanción de este proyecto de ley, por considerar que normas de estas características deben ser sancionadas por las Legislaturas provinciales. En consecuencia, en el caso de nuestra provincia, entendemos que su Legislatura es la única que puede sancionar una iniciativa de este tipo.

Por las razones expuestas, adelantamos el voto negativo de nuestro bloque para el proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Neri. — Señor presidente: la iniciativa que está a consideración de la Cámara, en los últimos años ha sido objeto de confrontación en la historia política y social argentina. Se trata de un tema que ha dividido opiniones y en relación con el cual buena parte de la dirigencia política se ha manejado por lo menos con ambigüedad, cuando no con contradicciones.

En lo que se refiere a la cuestión que hoy es materia de debate, el partido al que pertenezco cometió errores iniciales y dilaciones que afortunadamente luego fueron superados, y esto nos permitió tener un proceso realmente democrático de normalización de los sindicatos argentinos, del que estamos todos orgullosos. Es un tema que incluso ha significado cambios y acreado problemas en el partido político que históricamente estuvo más ligado al desarrollo del movimiento sindical argentino, como es el justicialismo, que si bien en su momento fue su columna vertebral, hoy es al menos la pierna

renga del peronismo. Pero quien tuvo claro el significado de todas estas cuestiones relacionadas con el movimiento sindical argentino fue el pueblo trabajador.

Cuando se indagó un poco en la opinión de la gente —no me refiero a encuestas electorales circunstanciales, sino a serios estudios realizados—, surgió con gran evidencia la altísima valoración que el pueblo trabajador hace de la institución sindical; su profunda adhesión racional y también emocional a una institución de la que se siente dependiente y en la que se ve fuertemente representado, adhesión casi equivalente a una actitud muy crítica, en muchos casos desvalorizante de la dirigencia sindical, que muchas veces ha manejado mal esa misma institución tan querida.

Este es un dato; no un intento de molestar a alguien, porque aquí no se trata de personas; no se trata de criticar individuos. Es un dato del sentimiento y del pensamiento del pueblo argentino, de ese mismo pueblo trabajador en nombre del cual hacemos tantas cosas y reivindicamos tantas banderas.

Esto tiene una historia; no pasa porque sí. Es la historia de la expansión del movimiento sindical argentino; expansión y fortalecimiento que se da en un período en el que se transforma en el sustento principal de un movimiento político organizado y promovido desde el propio Estado. Esta es la gran expansión del movimiento sindical argentino en la década del 40. Y esto genera un fuerte desarrollo de cúpulas dirigentes que son inicialmente intermediarias entre la base popular y el poder político, reivindicando legítimas aspiraciones por viejos marginamientos.

Pero luego, con la evolución de la historia argentina, esas cúpulas van adquiriendo autonomía y más allá de la voluntad de la gente, como producto de un tipo de desarrollo institucional y social, se va generando esto que sin sentido peyorativo me animo a calificar de modelo de feudalismo corporativo en el desarrollo sindical argentino. Es lo que hemos conocido los que en este momento tenemos algo más de cincuenta años de edad.

Este desarrollo se da juntamente con todo un marco legal e institucional que tiende a diluir el cuestionamiento de la base popular y a perpetuar el poder en manos de cúpulas relativamente reducidas.

Airededor de esto se desarrolla toda la función del sindicato argentino, legitimada en un permanente ejercicio reivindicativo, a veces con errores y otras con justicia, teniendo en cuenta lo que significa la postergación de nuestra gen-

te por el predominio de gobiernos autoritarios escasa o nulumamente representativos del interés popular.

Junto a esa línea de reivindicación se desarrolló toda una tendencia al monopolio de los servicios sociales; y se desarrolló también una fuerte capacidad de negociación de esas dirigencias con los gobiernos de turno —incluso con los gobiernos autoritarios— ya no sólo sobre políticas sectoriales, sino también sobre políticas globales; cúpulas que llegan a tener un alto grado de predominio en materia de decisiones y en la digitación de candidatos en algunos partidos políticos argentinos.

Todo esto consolida un determinado modelo de poder, pero también expresa un mal muy profundo de la sociedad argentina porque eso no se da sólo en el campo sindical, sino que también se advierte, por medio del crecimiento unilateral de los grupos corporativos, en el campo empresario, en el campo profesional, en el campo militar, en las organizaciones religiosas, en distintos ámbitos que señalan la crisis y la ausencia durante muchos años de un sistema político institucional que de por sí tiene la atribución fundamental de ser el mediador entre intereses inevitablemente contrapuestos.

Es así como llegamos a 1983, fecha a partir de la cual a pesar de la crisis, de las enormes dificultades y de la falta de experiencia en una praxis democrática, se advierte una maduración paulatina del sistema institucional, simultáneamente con un cambio a nivel de la dirigencia sindical que no sólo se refiere a una renovación de personas, sino también de actitudes, que la muestran más identificada con el modelo político democrático que en otras etapas de nuestra historia. Este es un dato positivo que debemos resaltar y aplaudir como paso necesario para la consolidación del sistema institucional argentino.

Atravesamos una etapa de depuración, diría de decantamiento del papel del sindicato y de sus dirigentes. No puedo afirmar que este proyecto de ley que regula la actividad sindical signifique su democratización en esta etapa de nuestra vida institucional. Se trata simplemente de un paso hacia ese logro. Vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley no como una concesión graciosa, según lo sostuvo el señor diputado Martínez —por otra parte, en ningún momento nadie de mi bancada dijo que lo fuera—, sino porque es la interpretación cabal de que debemos salir de una legislación autoritaria que hemos heredado. Pero ello no implica la ilusión de que estamos ingresando en el marco legislativo de una democracia fielmente refle-

jada en los sindicatos argentinos, porque esta legislación todavía está muy lejos de constituir ese logro.

Por eso aclaro que no es por disciplina de bloque que votaré favorablemente el proyecto de ley en debate. Lo haré porque entiendo que es la legislación posible en la Argentina de hoy y porque la sociedad —no éste o aquél partido— aún no se ha ganado una normativa mejor, dado que las leyes deben constituir el reflejo necesario de una maduración de la sociedad en su conjunto.

Todavía nos falta mucho por recorrer antes de alcanzar una auténtica democracia en nuestros sindicatos, pero vamos a alcanzar ese objetivo, porque tenemos muy en claro que la democracia es un camino y no un punto de llegada. En este aspecto, como en muchas otras cosas, hay todo un recorrido que efectuar hacia una verdadera democracia sindical, pero ésta es una etapa que queremos completar. Además, la queremos cumplir los radicales como integrantes de un partido de gobierno, demostrando responsabilidad en una indispensable flexibilidad que los sectores políticos y los representantes de los distintos grupos de interés debemos tener si queremos fortalecer definitivamente este sistema.

Nos preocupa ver que a veces algunos partidos opositores o sectores organizados de interés, por apuntar al descrédito de un gobierno, hacen blanco en el desaliento de la gente. Esta última es una variable a la que hay que prestar una cuidadosa atención para consolidar en serio el sistema democrático en la Argentina.

Por eso queremos poner en evidencia esta capacidad de flexibilidad que permite aprobar este proyecto, que constituye sólo una etapa y no un logro definitivo.

Esto no es un pragmatismo sin doctrina. Es tener una doctrina con objetivos muy claros y con instrumentos que se adaptan a las épocas. Vamos a seguir luchando por esa democracia que también anhelamos en el mundo sindical. Lo haremos inspirados en una frase que anoté de Max Weber, en la que dice que "es una verdad probada por la experiencia histórica que en este mundo sólo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible".

Vamos a seguir luchando y estamos seguros de que detrás de nosotros tendremos quizá no a la totalidad de la dirigencia sindical, pero sí al sentir inmensamente mayoritario de los argentinos, ya sean liberales, socialistas, peronistas o radicales, que realmente desean una participación efectiva en sus sindicatos y quieren canales abiertos para el cuestionamiento cuando éste es legítimo —mucho más abiertos que en el pa-

sado— para reivindicar y fortalecer esa institución indispensable en una democracia estable. (*Aplausos.*)

Sr. Bauzá. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Duhalde). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Bauzá. — En virtud de lo dispuesto por el artículo 108 del reglamento, formulo moción de orden para que se cierre el debate en mérito al tiempo transcurrido y a la importancia de la sanción de este proyecto, y teniendo en cuenta que han sido escuchadas opiniones medulosas de señores legisladores representantes de los distintos bloques que integran esta Cámara.

Asimismo, solicito que el cierre del debate sea sin lista de oradores y que se inserten en el Diario de Sesiones los discursos de los señores diputados que, en caso de aprobarse la moción, no puedan hacer uso de la palabra.

Sr. Pellin. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Duhalde). — Debo recordar al señor diputado que esta moción de orden debe ser puesta a votación sin discusión.

Sr. Pellin. — Simplemente deseaba señalar que, como me tocaba hacer uso de la palabra a continuación, no quiero dejar de aportar el testimonio del Movimiento Popular Neuquino, manifestando que vamos a votar afirmativamente y con total satisfacción y regocijo esta iniciativa que reivindica a la clase trabajadora argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Mendoza.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Duhalde). — Queda aprobada la moción.

Los señores diputados que no hubieran hecho uso de la palabra y deseen dejar constancia de su opinión acerca del asunto en tratamiento, deberán hacer llegar los textos respectivos a la Secretaría en tiempo oportuno, a fin de que puedan insertarse en el Diario de Sesiones correspondiente a esta reunión¹.

Corresponde proceder a votar en general el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Duhalde). — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 68.

— El artículo 67 es de forma.

Sr. Presidente (Duhalde). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado. (*Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.*)

13

MANIFESTACIONES

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Cardozo. — Solicito al señor diputado Jaroslavsky que postergue su moción de orden y me permita formular un pedido a la Honorable Cámara.

Sr. Monserrat. — Adhiero al pedido del señor diputado y solicito se me conceda oportunamente la palabra para realizar también un pedido.

Sr. Jaroslavsky. — Acepto, señor presidente, y postergo la moción a fin de que puedan hacer uso de la palabra los señores diputados Cardozo y Monserrat.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Cardozo. — Señor presidente: la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado diversas iniciativas relacionadas con el problema de la hermana República de Panamá y ha producido un despacho unánime. Habida cuenta de ello, como el proyecto cuya sanción aconseja la comisión requiere ser aprobado por la Cámara, solicito que sea considerado ahora a los fines de que quede concluido el trámite de esas iniciativas.

Sr. Presidente (Duhalde). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monserrat. — Señor presidente: efectivamente, en la sesión de la semana pasada se aprobó una moción de preferencia para que en la próxima reunión de la Cámara —es decir, hoy— se trataran, con despacho de comisión, dos proyectos que hemos presentado referidos a la situación que vive el hermano pueblo de Panamá,

¹ Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Pág. 5866.)

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 5775.)

no abunda en más detalles solicitando de sus pares su adhesión para que la Honorable Cámara haga suya la declaración propuesta.

*Eduardo P. Vaca. — José M. Soria Arch.
— Horacio H. Huarte.*

ANTECEDENTES

—Proyecto de resolución del señor diputado Monserrat y otros (expediente 2.827-D.-87): véase el Diario de Sesiones del 3 de marzo de 1988, página 5365.

—Proyecto de declaración de los señores diputados Auyero y Aramouni (expediente 2.839-D.-87): véase el Diario de Sesiones del 3 de marzo de 1988, página 5394.

—Proyecto de declaración del señor diputado Monserrat y otros (expediente 2.973-D.-87): véase el Diario de Sesiones del 16 de marzo de 1988, página 5700.

—Proyecto de declaración del señor diputado Storani (F. T. M.) (expediente 3.080-D.-87): véase página 5853.

Sr. Presidente (Duhalde). — En consideración en general.

Si ningún señor diputado desea hacer uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Duhalde). — En consideración en particular el punto 1.
Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los puntos 2 a 6.

Sr. Presidente (Duhalde). — Queda sancionado el proyecto de declaración¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15

MOCION

Sr. Presidente (Duhalde). — Está en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos para formular una moción de orden.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: hago moción de que la Cámara pase a cuarto intermedio hasta el miércoles 6 de abril a la hora acostumbrada.

Sr. Presidente (Duhalde). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Duhalde). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles 6 de abril a la hora establecida.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 17.

LORENZO D. CEDROLA.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 5783.)

16

APENDICE

A. SANCIONES DE LA HONORABLE CAMARA

1. PROYECTO DE LEY SANCIONADO DEFINITIVAMENTE

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO PRELIMINAR

De la tutela de la libertad sindical

Artículo 1º — La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales.

Art. 2º — Las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se regirán por esta ley.

Art. 3º — Entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador.

Art. 4º — Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales:

- a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales;
- b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafilarse;
- c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales;
- d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores;
- e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos.

Art. 5º — Las asociaciones sindicales tienen los siguientes derechos:

- a) Determinar su nombre, no pudiendo utilizar los ya adoptados ni aquellos que pudieran inducir a error o confusión;

- b) Determinar su objeto, ámbito de representación personal y de actuación territorial;
- c) Adoptar el tipo de organización que estimen apropiado, aprobar sus estatutos y constituir asociaciones de grado superior, afiliarse a las ya constituidas o desafiliarse;
- d) Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical.

Art. 6º — Los poderes públicos y en especial la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y sus asociaciones y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente.

Art. 7º — Las asociaciones sindicales no podrán establecer diferencias por razones ideológicas, políticas, sociales, de credo, nacionalidad, raza o sexo, debiendo abstenerse de dar un trato discriminatorio a los afiliados.

Lo dispuesto regirá también respecto de la relación entre una asociación de grado superior y otra de grado inferior.

Art. 8º — Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos deberán garantizar:

- a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus afiliados;
- b) Que los delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego, de su gestión;
- c) La efectiva participación de los afiliados en la vida de la asociación, garantizando la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
- d) La representación de las minorías en los cuerpos deliberativos.

Art. 9º — Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros.

Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales.

I. — De los tipos de asociaciones sindicales

Art. 10. — Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por:

- a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines;
- b) Trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas;
- c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa.

Art. 11. — Las asociaciones sindicales pueden asumir algunas de las siguientes formas:

- a) Sindicatos o uniones;
- b) Federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado;
- c) Confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones contempladas en los incisos que preceden a éste.

II — De la afiliación y desafiliación

Art. 12. — Las asociaciones sindicales deberán admitir la libre afiliación, de acuerdo a esta ley y a sus estatutos, los que deberán conformarse a la misma.

Art. 13. — Las personas mayores de catorce años, sin necesidad de autorización, podrán afiliarse.

Art. 14. — En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez, desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán por esas circunstancias el derecho de pertenecer a la asociación respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a las obligaciones que el estatuto establezca.

Art. 15. — El trabajador que dejare de pertenecer a una asociación sindical, no tendrá derecho al reintegro de las cuotas o aportes abonados. Lo dispuesto será aplicable a las relaciones entre asociaciones de diverso grado.

III

De los estatutos

Art. 16. — Los estatutos deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 8º y contener:

- a) Denominación, domicilio, objeto y zona de actuación;
- b) Actividad, oficio, profesión o categoría de los trabajadores que represente;
- c) Derechos y obligaciones de los afiliados, requisitos para su admisión y procedimiento para su separación, que garanticen el derecho de defensa;
- d) Determinación de las autoridades y especificación de sus funciones con indicación de las que ejerzan su representación legal, duración de los mandatos, recaudos para su revocación y procedimientos para la designación y reemplazos de los directivos e integrantes de los congresos;
- e) Modo de constitución, administración y control del patrimonio social y su destino en caso de disolución, y régimen de cotizaciones de sus afiliados y contribuciones;
- f) Época y forma de presentación, aprobación y publicación de memorias y balances; órganos para su revisión y fiscalización;
- g) Régimen electoral que asegure la democracia interna de acuerdo con los principios de la presente ley, no pudiendo contener como exigencia para presentar listas de candidatos a órganos asociativos, avales que suparen el tres por ciento (3 %) de sus afiliados;

- h) Régimen de convocatoria y funcionamiento de asambleas y congresos;
- i) Procedimiento para disponer medidas legítimas de acción sindical;
- j) Procedimiento para la modificación de los estatutos y disolución de la asociación.

IV

Dirección y administración

Art. 17. — La dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de cinco (5) miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo y secreto.

Los mandatos no podrán exceder de cuatro (4) años, teniendo derecho a ser reelegidos.

Art. 18. — Para integrar los órganos directivos, se requerirá:

- a) Mayoría de edad;
- b) No tener inhabiliciones civiles ni penales;
- c) Estar afiliado, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.

El setenta y cinco por ciento (75 %) de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos argentinos, el titular del cargo de mayor jerarquía y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos argentinos.

V

De las asambleas o congresos

Art. 19. — Las asambleas y congresos deberán reunirse:

- a) En sesión ordinaria, anualmente;
- b) En sesión extraordinaria, cuando los convoque el órgano directivo de la asociación, por propia decisión o a solicitud del número de afiliados o delegados congresales que fije el estatuto, el que no podrá ser superior al quince por ciento (15 %) en asamblea de afiliados y al treinta y tres por ciento (33 %) en asamblea de delegados congresales.

Art. 20. — Será privativo de las asambleas o congresos:

- a) Fijar criterios generales de actuación;
- b) Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo;
- c) Aprobar y modificar los estatutos, memorias y balances; la fusión con otras asociaciones, afiliación o desafiliación a asociaciones, nacionales o internacionales;
- d) Dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior y recibir el informe de su desempeño;
- e) Fijar el monto de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados.

VI

De la inscripción

Art. 21. — Las asociaciones presentarán ante la autoridad administrativa del trabajo solicitud de inscripción haciendo constar:

- a) Nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación;
- b) Lista de afiliados;
- c) Nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo;
- d) Estatutos.

Art. 22. — Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa (90) días de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial.

VII

De los derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales

Art. 23. — La asociación a partir de su inscripción, adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos:

- a) Peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados;
- b) Representar los intereses colectivos, cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial;
- c) Promover:
 - 1º La formación de sociedades cooperativas y mutuales.
 - 2º El perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social.
 - 3º La educación general y la formación profesional de los trabajadores;
- d) Imponer cotizaciones a sus afiliados,
- e) Realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa.

Art. 24. — Las asociaciones sindicales están obligadas a remitir o comunicar a la autoridad administrativa del trabajo:

- a) Los estatutos y sus modificaciones a los efectos del control de la legalidad;
- b) La integración de los órganos directivos y sus modificaciones;
- c) Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio, copia autenticada de la memoria, balance y nómina de afiliados;
- d) La convocatoria a elecciones para la renovación de sus órganos en los plazos estatutarios;
- e) Los libros de contabilidad y registros de afiliados a efectos de su rubricación.

VIII

De las asociaciones sindicales con personería gremial

Art. 25. — La asociación que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa, obtendrá personería gremial, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- a) Se encuentre inscrita de acuerdo a lo prescrito en esta ley y haya actuado durante un período no menor de seis (6) meses;
- b) Afilie a más del veinte por ciento (20 %) de los trabajadores que intente representar.

La calificación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar.

Los promedios se determinarán sobre los seis (6) meses anteriores a la solicitud.

Al reconocerse personería gremial, la autoridad administrativa del trabajo o judicial, deberá precisar el ámbito de representación personal y territorial. Estos no excederán de los establecidos en los estatutos, pero podrán ser reducidos si existiere superposición con otra asociación sindical.

Cuando los ámbitos pretendidos se superpongan con los de otra asociación sindical con personería gremial, no podrá reconocerse a la peticionante la amplitud de representación, sin antes dar intervención a la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar cuál es la más representativa conforme al procedimiento del artículo 28. La omisión de los recaudos indicados determinará la nulidad del acto administrativo o judicial.

Art. 26. — Cumplidos los recaudos, la autoridad administrativa del trabajo dictará resolución dentro de los noventa (90) días.

Art. 27. — Otorgada la personería gremial se inscribirá la asociación en el registro que prevé esta ley, publicándose en el Boletín Oficial, sin cargo, la resolución administrativa y los estatutos.

Art. 28. — En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, sólo podrá concederse igual personería a otra asociación, para actuar en la misma zona y actividad o categoría, en tanto que la cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, durante un período mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores a su presentación, fuere considerablemente superior a la de la asociación con personería preexistente.

Presentado el requerimiento del mismo se dará traslado a la asociación con personería gremial por el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza su defensa y ofrezca pruebas.

De la contestación se dará traslado por cinco (5) días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán con el control de ambas asociaciones.

Cuando se resolviera otorgar la personería a la solicitante, la que la poseía continuará como inscrita.

La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando mediere

conformidad expresa del máximo órgano deliberativo de la asociación que la posea.

Art. 29. — Sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa, cuando no opere en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión.

Art. 30. — Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de oficio, profesión o categoría, la personería podrá concedérsele si existieran intereses sindicales diferenciados como para justificar una representación específica y se cumplieren los requisitos exigidos por el artículo 25, y siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en su personería la representación de dichos trabajadores.

Art. 31. — Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial:

- a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores;
- b) Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas;
- c) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social;
- d) Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores;
- e) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;
- f) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o por convenciones colectivas de trabajo.

IX

De las federaciones y confederaciones

Art. 32. — Las federaciones y confederaciones más representativas adquirirán personería gremial en las condiciones del artículo 25.

Art. 33. — Se considerarán federaciones más representativas, las que estén integradas por asociaciones de primer grado que afilien a la mayor cantidad de los trabajadores cotizantes comprendidos en su ámbito.

Se considerarán confederaciones más representativas las que afilien a entidades con personería gremial que cuenten con la mayor cantidad de trabajadores cotizantes.

Art. 34. — Las federaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos que la presente ley acuerda a las asociaciones de primer grado con personería gremial, con las limitaciones que en relación a los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de las mismas.

Por su parte, las asociaciones de segundo y tercer grado podrán representar a las entidades de grado inferior adheridas a ellas, en toda tramitación de índole

administrativa, pudiendo a tal efecto deducir y proseguir los recursos que fuese conveniente interponer y adoptar las medidas que hubiere menester para la mejor defensa de los derechos de las mismas.

Art. 35. — Las federaciones con personería gremial podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad o categoría por ellas representadas, en aquellas zonas o empresas donde no actuare una asociación sindical de primer grado con personería gremial.

Art. 36. — El máximo órgano deliberativo de las asociaciones sindicales de grado superior podrá disponer la intervención de las de grado inferior sólo cuando los estatutos consagren esta facultad y por las causales que dichos estatutos determinen, garantizando el debido proceso. Esta resolución será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

X

Del patrimonio de las asociaciones sindicales

Art. 37. — El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:

- a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y las contribuciones de solidaridad que se pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas;
- b) Los bienes adquiridos y sus frutos;
- c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta ley.

Art. 38. — Los empleadores estarán obligados a actuar como "agentes de retención" de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciera, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como "agente de retención", o —en su caso— de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.

Art. 39. — Los actos y bienes de las asociaciones sindicales con personería gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en los artículos 5º y 23, estarán exentos de toda tasa, gravamen, contribución o impuesto. La exención es automática y por la sola obtención de dicha personería gremial.

El Poder Ejecutivo nacional gestionará con los gobiernos provinciales y por su intermedio de las municipalidades, que recepten en su régimen fiscal, el principio admitido en este artículo.

XI

De la representación sindical en la empresa

Art. 40. — Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares, ejercerán en los lugares de trabajo o según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados la siguiente representación:

- a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo cuando ésta actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical;
- b) De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.

Art. 41. — Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:

- a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo justificaran.

Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante, no existiera una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente inscrita.

En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un (1) año;

- b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección.

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar, la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada.

Art. 42. — El mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano directivo de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del diez por ciento (10 %) del total de los representados. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de los delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios de la asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa.

Art. 43. — Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 40 de esta ley, tendrán derecho a:

- a) Verificar la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo;
- b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante;
- c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de la asociación sindical respectiva.

Art. 44. — Sin perjuicio de lo acordado en convenciones colectivas de trabajo, los empleadores estarán obligados a:

- a) Facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario;
- b) Concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndose representar;
- c) Conceder a cada uno de los delegados del personal, para el ejercicio de sus funciones, un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicable.

Art. 45. — A falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será:

- a) De diez (10) a cincuenta (50) trabajadores un (1) representante;
- b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) representantes;
- c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior.

En los establecimientos que tengan más de un turno de trabajo habrá un (1) delegado por turno, como mínimo.

Cuando la representación sindical esté compuesta por tres (3) o más trabajadores, funcionará como cuerpo colegiado.

Sus decisiones se adoptarán en la forma que determinen los estatutos.

Art. 46. — La reglamentación de lo relativo a los delegados del personal deberá posibilitar una adecuada tutela de los intereses y derechos de los trabajadores teniendo en cuenta la diversidad de sectores, turnos y demás circunstancias de hecho que hagan a la organización de la explotación o del servicio.

XII — De la tutela sindical

Art. 47. — Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el artículo 498 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical.

Art. 48. — Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejen de prestar servicios, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido.

El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período de trabajo a todos los efectos, excepto para determinar promedios de remuneraciones.

Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.

Art. 49. — Para que surta efecto la garantía antes establecida se deberán observar los siguientes requisitos:

- a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los recaudos legales;
- b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se probará mediante telegrama o carta documento u otra forma escrita.

Art. 50. — A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser despedido, suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo, por el término de seis (6) meses. Esta protección cesará para aquellos trabajadores cuya postulación no hubiera sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos.

Art. 51. — La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley.

Art. 52. — Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente, a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco (5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado en su puesto o el mantenimiento de las condiciones de trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa.

La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación en su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.

Si se decidiera la reinstalación, el juez podrá aplicar al empleador que no cumpliera con la decisión firme, las disposiciones del artículo 668 bis del Código Civil, durante el período de vigencia de su estabilidad.

El trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato no electo tendrá derecho a percibir, además de las indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el importe de un año más de remuneraciones.

La promoción de las acciones por reinstalación o por restablecimiento de las condiciones de trabajo a las que refieren los párrafos anteriores interrumpe la prescripción de las acciones por cobro de indemnización y salarios caídos allí previstas. El curso de la prescripción comenzará una vez que recayere pronunciamiento firme en cualquiera de los supuestos.

XIII

De las prácticas desleales

Art. 53. — Serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los representen:

- a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores;
- b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo;
- c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas;
- d) Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical;

- e) Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales;
- f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación;
- g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley;
- h) Negarse a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremiales;
- i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen, cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación genetal o simultánea a todo el personal;
- j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen;
- k) Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de la elección de los delegados del mismo en los lugares de trabajo.

Art. 54. — La asociación sindical de trabajadores o el damnificado, conjunta o indistintamente, podrán promover querrela por práctica desleal ante el juez o tribunal competente.

Art. 55. —

- 1º Las prácticas desleales se sancionarán con multas, que serán fijadas de acuerdo con los artículos 49 y siguiente de la ley 18.694 de infracciones a las leyes de trabajo, salvo las modificaciones que aquí se establecen.

En el supuesto de prácticas desleales múltiples, o de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el quíntuplo del máximo previsto en la ley 18.694.

- 2º Cuando la práctica desleal fuera cometida por entidades representativas de empleadores, la multa será fijada razonablemente por el juez hasta un máximo del equivalente al veinte por ciento de los ingresos provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en el mes en que se cometió la infracción.

Los importes de las multas serán actualizados a la fecha del efectivo pago, de acuerdo con las disposiciones sobre índice de actualización de los créditos laborales. Cuando la práctica desleal pudiera ser reparada mediante el cese de la medida que la hubiere producido o la realización de los actos que resulten idóneos,

conforme a la decisión calificadora, y el infractor mantuviera las medidas o dejare de cumplir los actos tendientes a la cesación de sus efectos, el importe originario se incrementará automáticamente en un diez por ciento por cada cinco días de mora, mientras se mantenga el incumplimiento del empleador o entidad representativa de los empleadores.

Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto por el artículo 666 bis del Código Civil, quedando los importes que así se establezcan en favor del damnificado.

- 3º El importe de las multas será percibido por la autoridad administrativa del trabajo e ingresado en una cuenta especial, y será destinado al mejoramiento de los servicios de inspección del trabajo, a cuyo fin la autoridad administrativa tomará intervención en el expediente judicial, previa citación del juez.
- 4º Cuando la práctica desleal fuere reparada mediante el cese de los actos motivantes, dentro del plazo que al efecto establezca la decisión judicial, el importe de la sanción podrá reducirse hasta el cincuenta por ciento.

XIV

De la autoridad de aplicación

Art. 56. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y estará facultado para:

- 1º Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y llevar los registros respectivos.
- 2º Requerir a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen:
 - a) Violación de las disposiciones legales o estatutarias;
 - b) Incumplimiento a disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de facultades legales.
- 3º Peticionar en sede judicial la suspensión o cancelación de una personería gremial o la intervención de una asociación sindical, en los siguientes supuestos:
 - a) Incumplimiento de las intimaciones a que se refiere el inciso 2º de este artículo;
 - b) Cuando haya comprobado que en las asociaciones se ha incurrido en graves irregularidades administrativas. En el proceso judicial será parte la asociación sindical afectada. No obstante lo antes prescrito, cuando existiera peligro de serios perjuicios a la asociación sindical o a sus miembros, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación podrá solicitar judicialmente medidas cautelares a fin que se disponga la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y se designe un

funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades que determinan se adopte esa medida cautelar.

- 4º Disponer la convocatoria a elecciones de los cuerpos que en las asociaciones sindicales de trabajadores tienen a su cargo el gobierno, la administración y la fiscalización de los actos que realicen estos últimos, así como también ejecutar los demás actos que hubiere menester para que mediante el proceso electoral se designen a los integrantes de esos cuerpos. Al efecto asimismo podrá nombrar las personas que deban ejecutar esos actos. Todo ello cuando el órgano de la asociación facultado para ejecutarlo, después que hubiese sido intimado para que lo hiciere, dentro de un lapso determinado, incumpliera el requerimiento.

En caso de que se produjere un estado de acefalía con relación a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción, y en tanto en los estatutos de la asociación de que se trate o en los de la federación de la que ésta forme parte, no se haya previsto el modo de regularizar la situación, la autoridad de aplicación también podrá designar un funcionario para que efectúe lo que sea necesario para regularizar la situación. Por su parte si el órgano encargado de convocar a reunión de la asamblea de la asociación o al congreso de la misma, no lo hubiere hecho en el tiempo propio, y ese órgano no dé cumplimiento a la intimación que deberá cursarse para que lo efectúe, la autoridad de aplicación estará facultada para hacerlo para adoptar las demás medidas que correspondan para que la reunión tenga lugar.

Art. 57. — En tanto no se presente alguna de las situaciones antes previstas, la autoridad administrativa del trabajo no podrá intervenir en la dirección y administración de las asociaciones sindicales a que se refiere esta ley, y en especial restringir el manejo de los fondos sindicales.

Art. 58. — El control de las asociaciones sindicales, aunque hubieren obtenido personería jurídica en virtud de las disposiciones del derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Art. 59. — Para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren.

Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los sesenta (60) días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto, podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá pronun-

ciarse dentro de los sesenta (60) días hábiles, rigiendo en caso de silencio lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.549 y su reglamentación. Agotado el procedimiento administrativo, quedará expedita la acción judicial prevista en el artículo 62, inciso e) de la presente ley.

La resolución de encuadramiento, emane de la autoridad administrativa del trabajo o de la vía asociacional, será directamente recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La resolución que ponga fin al conflicto de encuadramiento sindical sólo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la asociación gremial respectiva con relación al ámbito en conflicto.

Art. 60. — Sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos, en los diferendos que puedan plantearse entre los afiliados a una asociación sindical de trabajadores y ésta, o entre una asociación de grado inferior y otra de grado superior será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 61. — Todas las resoluciones definitivas de la autoridad administrativa del trabajo en la materia regulada por esta ley, una vez agotada la instancia administrativa, son impugnables ante la justicia, por vía de recurso de apelación o de acción sumaria, según los casos, y en la forma establecida en los artículos 62 y 63 de la presente ley.

Art. 62. — Será competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocer los siguientes casos:

- a) Las acciones que promueva la autoridad administrativa del trabajo;
- b) Los recursos contra resoluciones administrativas definitivas que decidan sobre otorgamiento, de personería gremial, encuadramiento sindical u otros actos administrativos de igual carácter, una vez agotada la instancia administrativa;
- c) La demanda por denegatoria tácita de una personería gremial;
- d) La demanda por denegatoria tácita de una inscripción;
- e) Las acciones de encuadramiento sindical que se promuevan por haber vencido el plazo establecido para que se pronuncie la autoridad administrativa, sin que ésta lo hubiera hecho;
- f) Los recursos previstos en el artículo 36 de esta ley.

Las acciones de los incisos a), c), d) y e) del párrafo anterior se sustanciarán por las normas del proceso sumario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En este proceso la Cámara podrá ordenar las medidas para mejor proveer que considere convenientes. Asimismo proveerá la producción de las pruebas ofrecidas por las partes que sean conducentes, pudiendo disponer su recepción por el juzgado de primera instancia que corresponda, el que deberá elevar las actuaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizada su sustanciación.

Las acciones previstas en los incisos c) y d) de este artículo deberán deducirse dentro de los ciento veinte (120) días hábiles del vencimiento del plazo otorgado a la autoridad administrativa para resolver.

Tratándose de recursos, éstos deberán ser fundados e interponerse ante la autoridad administrativa, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la resolución. Dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la interposición del recurso, la autoridad administrativa deberá remitir a esa Cámara las respectivas actuaciones. Cuando la decisión recurrida afecte los alcances de una personería, radicado el expediente en sede judicial, deberá darse traslado a las asociaciones afectadas, por el término de cinco (5) días.

Art. 63. —

1º Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en:

- a) Las cuestiones referentes a prácticas desleales;
- b) Las acciones previstas en el artículo 52;
- c) En las acciones previstas en el artículo 47.

2º Estas acciones se sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legislación local.

Art. 64. — Las asociaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada su reglamentación, la que deberá ser dictada dentro de los noventa (90) días por el Poder Ejecutivo nacional.

Mientras no se realice la mencionada adecuación y su aprobación por la autoridad administrativa, prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la presente ley sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieren oponerse.

Art. 65. — La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Art. 66. — Derógase la ley de facto 22.105 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 67. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley 23.551

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de marzo del año mil novecientos ochenta y ocho.

VÍCTOR H. MARTÍNEZ.

EDUARDO A. DUHALDE.

Antonio J. Macris.

Carlos A. Bravo.

Secretario del Senado.

Secretario de la C. de DD.

2. DECLARACIONES

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1 — Su profunda preocupación por el estado crítico existente en la hermana República de Panamá y las consecuencias que puede tener para la estabilidad del conjunto de la región centroamericana.

2 — Que reitera que sólo mediante el ejercicio efectivo de la democracia representativa, en la libre deter-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Informaciones periodísticas no desmentidas aún por nuestra Cancillería, ni por las de los países supuestamente comprometidos en este proyecto, preocupan a los miembros de esta Cámara ante la posibilidad que, desde el territorio continental, se preste ayuda de distinta naturaleza al agresor imperialista. Habiéndose, por otra parte, canales que posibiliten la explotación comercial de riquezas marítimas en la zona de exclusión, delimitada por los ilegales ocupantes de las islas, tal como lo afirma el mismo consorcio de empresas pesqueras que opera en la zona del mar Austral Argentino bajo una pretendida licencia británica.

Señor presidente, la Cancillería, inspirada en un espíritu de hermandad y solidaridad latinoamericanas, que hoy más que nunca nos debe alumbrar, ante el recrudecimiento de las provocaciones británicas para con nuestro país, debe activar los mecanismos diplomáticos necesarios para que, de confirmarse la veracidad de las versiones antedichas, requiera de los países presuntamente involucrados que no faciliten sus puertos para evitar se consuma un nuevo acto de menoscabo de nuestra soberanía en las irredentas islas.

*Fernando E. Paz. — Roberto J. García. —
David J. Casas. — Roberto S. Digón.*

—A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

C. INSERCIONES

INSERCIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO BAUZA

Opiniones de los señores diputados acerca del proyecto de ley por el que se establece el régimen legal de las asociaciones sindicales de trabajadores

a) *Del señor diputado Albamonte:*

Señor presidente:

Tengo que confesar que también yo me encuentro azorado por las manifestaciones vertidas por el señor diputado Pepe, quien demuestra un total desconocimiento de las ideas liberales, atribuyéndoles una malignidad de la que por supuesto carecen, a tal punto que fue justamente un gobierno liberal, el del general Roca, en 1904, el que primero atendió legislativamente las necesidades de los trabajadores.

Daría la impresión de que no se habrían entendido con claridad las expresiones del señor diputado Federico Clérici, de la UCeDé, cuando señalara el respeto que por los sindicatos tenemos los liberales, lo que ha llevado a hacer una interpretación caprichosa sobre este punto.

Por otro lado adherimos plenamente a lo expresado en nuestra Constitución Nacional, cuyo artículo 14 señala que todos los habitantes de nuestra Nación tienen el derecho de asociarse con fines útiles. Lo que nosotros creemos es que la superación de las deficiencias, los padeceres y la postergación de muchos habitantes de nuestro suelo —que tan bien describiera el señor diputado Cardozo— no se logrará con medidas que

XI

Licencias

SOLICITAN LICENCIA PARA FALTAR A SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA LOS SEÑORES DIPUTADOS:

Vega Aciar: para el día 16 de marzo de 1988, por razones de salud (3.063-D.-87).

Golpe Montiel: para el día 16 y 17 de marzo de 1988, por razones particulares (3.064-D.-87).

Auyero: para el día 16 de marzo de 1988, por trasladarse al exterior (3.068-D.-87).

Sella: para el día 16 de marzo de 1988, por razones particulares (3.071-D.-87).

Marín: para el día 16 de marzo de 1988, por razones particulares (3.072-D.-87).

Ramírez: para el día 16 de marzo de 1988, por razones particulares (3.073-D.-87).

De Nichilo: para el día 16 de marzo de 1988, por razones particulares (3.074-D.-87).

Romero (R.): para el día 16 de marzo de 1988, por razones particulares (3.075-D.-87).

Ibarbia: para el día 16 de marzo de 1988, por razones político-partidarias (3.084-D.-87).

Nuín: para el día 23 de marzo de 1988, por razones particulares (3.110-D.-87).

Díaz: por el término de diez (10) días a partir del 21 de marzo de 1988, por razones de salud (3.123-D.-87).

—Sobre tablas.

implemente autoritariamente un burócrata. Por el contrario, creemos en la libre iniciativa porque creemos en el hombre argentino, sea éste empresario, profesional, estudiante o trabajador.

Esta ley ha sido postergada durante cuatro largos años. Cuando se trató a principios de este período constitucional, rechazamos la injerencia del Estado en la forma de organizarse que compete sólo a quienes deciden hacerlo y no a un ente oficial. Esa actitud provocó en aquel momento el regocijo de la barra, que vio en nuestra posición una actitud coherente y razonable.

Esta ley tiende lamentablemente a mantener el sistema corporativo que se ha venido prolongando durante los últimos cuarenta años.

El señor diputado Borda ha manifestado que es una legítima aspiración del movimiento obrero organizado no estar excluido del nivel de decisiones con las que la política económica adopta criterios tales como la distribución del ingreso, agregando luego que difícilmente el Estado incorporará a sus políticas distributivas la consideración de dichos intereses si no tiene frente a sí a quienes los representen con fuerza suficiente como para cuestionar con éxito sus decisiones.

Por otro lado, el señor diputado Pepe afirmó que para los liberales "todo sirve". "Privaticemos, rematemos, entreguemos este Estado que no sirve", fueron sus afirmaciones, cuando en realidad una sana política de privatización, de achicamiento del Estado y de contención del gasto público tendrá como principal beneficiario a ese trabajador del que esta noche nos estamos ocupando en forma tan vehemente, pero que recibe como consecuencia de la mala política que implementan tanto radicales como peronistas salarios bajísimos y un desmejoramiento cada vez más notable de su nivel de vida.

El señor diputado Cardozo habló de que se escucharon en este recinto voces que dieron un discurso liberal. Esas voces pertenecen a los representantes de una idea que está creciendo día a día, y cuyo creciente aumento en esta Cámara lo demuestra. Pero, por otro lado, es positivo que el señor diputado haya reconocido que hemos sido precisamente los liberales quienes a principios de siglo fuimos los primeros en preocuparnos efectivamente por los derechos de los trabajadores.

Señor presidente: a través de este debate ha quedado claro que existe un acuerdo entre el justicialismo y los radicales para la aprobación de esta norma, a pesar de la disconformidad que respecto de ella han manifestado muchos diputados preopinantes. Hubo quien dijo que ésta no es una ley ideal. Yo le contesto que es cierto, y que hay que tener ideales para sancionar buenas leyes.

b) De la senora diputada Fernández de Quarracino:

Señor presidente:

A pocos minutos de una fecha que recuerda un acontecimiento aciago para la vida del país reciente, no puede ser menos que nombrar en este recinto y en esta ocasión tan particular a un verdadero mártir del sindicalismo argentino; esa figura cristalina de Oscar Smith, que fue y sigue siendo bandera de las luchas por los derechos humanos universales.

Me alegro de votar una ley que establece en su artículo 3º que la acción sindical tiene como objetivo "remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador". O sea, que va mucho más allá que la mera reivindicación salarial; abarca techo, calidad de vida, condiciones sociopolíticas, etcétera.

Ojalá en un futuro no muy lejano estemos también legislando —con el aporte de los interesados— sobre una visión más humana, más solidaria y más justa de las empresas estatales o privadas. La cogestión y la coparticipación, consagradas por el artículo 14 bis de la Constitución vigente, no son inventos trasnochados sino formas ya probadas de convertir a las empresas en comunidades laborales y no sólo en meros instrumentos económicos.

Esta ley asegura en su artículo 4º la libertad de asociarse, de peticionar, de participar. No puede entenderse aquí la libertad de asociación sin separarla del contexto real de nuestro país. Una atomización sindical sólo llevaría al debilitamiento de los gremios obreros frente a poderosas organizaciones empresarias,

y ya se sabe que una libertad de este tipo es un sofisma.

Si tenemos que procurar que dentro de sindicatos fuertes haya verdadera representatividad, transparencia y federalismo. Por eso hubiera preferido que este ordenamiento legal asegurase más el derecho de los afiliados a conocer la marcha del sindicato y de sus finanzas (tanto en su origen como en su uso); que respetase la participación de las minorías no sólo en los cuerpos deliberativos.

Me hubiese gustado votar una ley que reconociese más a los delegados de base, ya que ellos están en contacto directo con las necesidades y expectativas de los obreros; una ley que diese más libertad de acción a las organizaciones provinciales.

El artículo 23 del proyecto que estamos tratando establece también que es función del sindicalismo: la representación de los intereses individuales y colectivos de los obreros; la formación de sociedades cooperativas y mutuales; el perfeccionamiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social; la educación en general y la formación profesional de los trabajadores. Quiero detenerme en este último punto, porque si bien esta tarea no es exclusiva de las asociaciones profesionales, creo que son ellas las más idóneas y las más obligadas a la capacitación no sólo laboral sino también gremial de sus asociados.

En este momento específico del mundo, en que el cambio económico, social y político es vertiginoso, se convierte en un verdadero desafío para el sindicalismo adecuarse a la sociedad cada vez más compleja que nos toca vivir y preparar a sus miembros. Creo que esto se hace más urgente en el caso de la mujer trabajadora, ya que muchas de las postergaciones que soporta se deben a su necesidad de capacitación profesional y sindical. Sólo entonces podremos aproximarnos a la igualdad de oportunidades para varones y mujeres.

Esta ley representa un gran avance sobre leyes anteriores. Nuestro sindicalismo no sólo representa una de las grandes conquistas populares sino que también ha sido y es actor de los más importantes acontecimientos históricos de nuestra época. Ojalá que sea ejemplo de participación, de renovación y de ebullición democráticos, porque los trabajadores no son un segmento más o menos numeroso de la fuerza productiva de una Nación sino que constituyen el motor principal, el alma, la fuerza de su crecimiento. Y esto es cierto respecto de todos: hombres y mujeres, trabajadores manuales e intelectuales, sin distinción de razas, colores ideológicos o sectores políticos.

Ser trabajador no sólo es un deber que da derechos. Fundamentalmente, el que trabaja merece leyes cada vez mejores para que su tarea no sea un castigo bíblico sino una bendición.

c) Del señor diputado Guidi:

Señor presidente:

Muy brevemente deseo expresar en nombre del Movimiento Popular Jujeño y del Movimiento Popular

Catamarqueño que vamos a ser consecuentes con la postura adoptada por nuestros bloques en oportunidad del tratamiento de este proyecto en su paso anterior por este recinto. Adelanto, por lo tanto, nuestro voto favorable al mismo.

Deseo expresar, aun pecando de reiterativo con conceptos vertidos en aquella oportunidad por diputados de nuestro bloque, que sí queremos organizaciones gremiales fuertes; organizaciones capaces de asumir la defensa de los trabajadores en un marco fortalecido por la unidad gremial. Pero también tenemos que decir que no queremos sindicatos atados al carro de ningún partido político, esté o no en el gobierno, porque si se encuentran atados a un determinado partido político o a un determinado gobierno corren el riesgo de

perder de vista sus grandes objetivos de defender los intereses de los trabajadores.

Manifiesto, además, mi beneplácito porque las circunstancias de mi vida política me han conferido el honor de emitir mi voto favorable a este proyecto, porque estoy convencido de que hoy vamos a entregar a los trabajadores un arma, no en el sentido de peligrosidad, sino un arma óptima para que las fuerzas del trabajo encuentren su camino de grandeza y de justicia.

Estoy seguro de que los trabajadores argentinos la recibirán con gran responsabilidad, con esa responsabilidad que siempre los ha caracterizado y los ha llevado permanentemente a sobreponer los intereses de la Nación a los intereses de su sector.